



**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID**  
**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN**

**MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS AVANZADOS EN**  
**COMUNICACIÓN POLÍTICA**

**TRABAJO FIN DE MÁSTER**

El desarrollo de la opinión pública frente a la gestión política del presidente Guillermo Lasso en el campo de la seguridad ciudadana. Una mirada desde las crisis penitenciarias (2021 – 2022)

Autor: Rommel Israel Obando

Tutor: Ana Fernández Zubieta

Curso académico: 2023/2024

Convocatoria Junio 2024

Número de palabras: 17950



Estudios Avanzados en Comunicación Política  
Máster Oficial

## VISTO BUENO DEL TUTOR PARA DEFENSA PÚBLICA DE TRABAJO FIN DE MASTER (TFM)

Este documento se entregará firmado junto a los originales del TFM

El profesor del Máster en Estudios Avanzados en Comunicación Política

\_\_\_\_\_ Ana Fernández Zubieta \_\_\_\_\_

Otorga su visto bueno para la presentación a Tribunal evaluador del Trabajo Fin de Máster del alumno

\_\_\_\_\_ Rommel Israel Obando \_\_\_\_\_

Con correo electrónico \_\_\_\_\_ robando@ucm.es \_\_\_\_\_

Cuyo título es:

\_\_\_\_\_ El desarrollo de la opinión pública frente a la gestión política del presidente Guillermo Lasso en el campo de la seguridad ciudadana. Una mirada desde las crisis penitenciarias (2021 – 2022)\_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_ 28 \_\_\_ / 05 \_\_\_ / \_\_\_ 2024 \_\_\_\_\_

Firmado por FERNANDEZ ZUBIETA ANA - DNI  
\*\*\*4089\*\* el día 28/05/2024 firma  
electrónica certificada por AC Sector  
Público

Fdo. Prof.: Ana Fernández Zubieta

## DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD Y AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN WEB

El/La abajo firmante **DECLARA** ser el/la autor/a del Trabajo de Fin de Master que presenta como culminación de sus estudios de Máster en Estudios Avanzados en Comunicación Política de la Universidad Complutense de Madrid, para ser evaluado por el Tribunal correspondiente y **desea hacer constancia de lo siguiente:**

1. **El trabajo es original e inédito** y es producto de su contribución intelectual, bajo la tutela de uno o varios profesores de esta Máster.
2. **Las figuras, tablas e ilustraciones** que acompañan al trabajo representan fielmente los hechos informados y **no han sido alteradas digitalmente.**
3. **Todos los datos y las referencias** a textos y materiales ya publicados están **debidamente identificados y referenciados en el texto y en las notas bibliográficas.**
4. **Autoriza** la publicación del trabajo en la web oficial del Master.

**Nombre del autor/a:** Rommel Obando Vargas.

**Título del TFM:** El desarrollo de la opinión pública frente a la gestión política del presidente Guillermo Lasso en el campo de la seguridad ciudadana. Una mirada desde las crisis penitenciarias (2021 - 2022)

Para dejar constancia de lo anteriormente expuesto, se firma esta declaración en Madrid, a 28 de mayo de 2024

Fdo.:

## **Resumen**

En la última década, la seguridad ciudadana se ha posicionado como un tema recurrente en los debates académicos sobre su influencia en la comunicación política de América Latina. Esto debido a que los procesos democráticos han impulsado diferentes enfoques estratégicos para afrontar los altos índices de violencia que afectan el desarrollo social de los países de la región. No obstante, para la sociedad civil, la ausencia de efectividad del Estado para frenar la creciente ola de violencia ha inspirado la búsqueda hacia un proyecto político que promueva acciones punitivas que tengan como fin reestructurar el sistema judicial y, por ende, cambiar las dinámicas del sistema penitenciario. A consecuencia, la presente investigación recoge las principales crisis carcelarias que ocurrieron en Ecuador, entre los años 2021-2022, bajo la administración del Gobierno de Guillermo Lasso con el objetivo de conocer si estas tuvieron incidencia en los niveles de aprobación ciudadana bajo la gestión de este Gobierno que, cabe destacar, empezó como uno de los más altos de la región.

Para ello se analizan distintos informes de encuestas proporcionados por las agencias Click Research y Perfiles de Opinión con el fin de identificar si los cambios fueron resultado del acontecimiento periódico de las diferentes crisis carcelarias o fueron gracias a la intervención de agentes externos como, por ejemplo; políticas públicas, medios de comunicación, etc. Finalmente, este estudio sostiene que la seguridad ciudadana es un punto importante para el sostenimiento de los niveles de representatividad entre ciudadanía y Gobierno ya que el poco cuidado de esta puede detonar episodios catárticos que afectan tanto a la agenda institucional como a la agenda pública.

Palabras clave: Gobierno, agenda pública, seguridad ciudadana, centros penitenciarios, crisis carcelarias

## Índice

Resumen.....	4
Introducción .....	8
Objetivos.....	14
3. Marco Teórico.....	15
3.1 Comunicación Política y Gestión de Crisis en América Latina .....	15
3.2 Seguridad ciudadana en América Latina.....	17
3.2.1 La mirada de los Centros Penitenciarios según Nayib Bukele .....	24
3.3 Ecuador, seguridad ciudadana y Guillermo Lasso .....	27
3.3.1 El recorte presupuestario como estrategia política .....	34
4. Hipótesis. ....	38
5. Marco Metodológico.....	39
6.- Análisis .....	44
6.1 Antes de las crisis carcelarias y Guillermo Lasso. ....	44
6.2 El clima de la opinión pública en la gestión de Guillermo Lasso. ....	46
6.3 Entre los registros del Estado y la opinión pública .....	52
6.4 El resultado del primer año de gestión del Gobierno de Guillermo Lasso .....	59
7. Conclusiones.....	60
Referencias.....	69
Anexos .....	73

Ficha Técnica Click Research .....	73
Preguntas seleccionadas Click Research.....	73
Ficha técnica Perfiles de Opinión.....	74
Preguntas seleccionadas Perfiles de Opinión .....	74

## Índice de figuras

Figura 1 <i>Dimensiones de seguridad ciudadana</i> .....	19
Figura 2 <i>Principal problema en América Latina del año 2018</i> .....	21
Figura 3 <i>Tasa de Homicidios por 100.000 habitantes</i> .....	28
Figura 4 <i>Tasa de Homicidios por 100.000 habitantes</i> .....	32
Figura 5 <i>Población Promedio de las personas privadas de la libertad</i> .....	33
Figura 6 <i>Presupuesto asignado al Sistema Penitenciario y Número de PPL</i> .....	36
Figura 7 <i>Crisis carcelarias y encuestas de opinión pública</i> .....	40
Figura 8 <i>Variables, datos y fuentes de la investigación</i> .....	43
Figura 9 <i>Evolución de los índices de valoración ciudadana</i> .....	46
Figura 10 <i>Índices Nacionales y Opinión Pública</i> .....	53

## **Introducción**

La comunicación política en América Latina es un campo de producción de sentidos que reafirma la pertenencia de la ciudadanía colectiva a la nación. Es decir, la relación de poder entre ambas tiene como objetivo construir, desde lo simbólico, un horizonte de pertenencia colectiva en el que la ciudadanía sea consumidora de un relato acorde a las propuestas políticas del Estado. No obstante, en ocasiones, esto conduce a una nula respuesta activa de participación o toma de decisiones. Es decir, la relación entre la ciudadanía y Gobierno está atada a los producciones simbólicas y afectivas que pueden llegar alcanzar un ambiente armónico o caótico en el desarrollo de los diversos países de la región.

En los últimos 10 años, diferentes países de la región han pasado por un ambiente de ingobernabilidad que ha acentuado procesos disruptivos en los que la ciudadanía no llega a encaminar mecanismos de confianza o representatividad en los proyectos políticos que asumen la administración del Estado. Esto ha permitido que los medios de comunicación tengan un mayor papel protagónico en la producción de sentido entre la ciudadanía y el Gobierno a través de las campañas políticas y la elaboración de agendas.

A raíz de la intervención de los medios de comunicación, según palabras de Crespo (2015: 21), los ciudadanos perciben y reaccionan en términos electorales ante las amenazas, los miedos y los peligros de forma inmediata, casi inconsciente, y su capacidad de atención y retención de los mensajes aumenta exponencialmente cuando éstos se perciben con una carga negativa. Esto quiere decir que, a través de la emotividad, la construcción del enemigo público provoca un impulso de respuesta y confianza de la ciudadanía hacia un proyecto político que busque solucionar el mal que lo aqueja.

Una de las amenazas más frecuentes en la región latinoamericana es la inseguridad y el crimen organizado. Según un informe del Ipsos del año 2018 indica que la inseguridad se encuentra en el cuarto lugar de los cinco principales problemas de la región según la opinión pública. Cabe destacar que los demás problemas regionales que presenta este informe también afectan al tejido social de un Estado de bienestar. Por ejemplo; la corrupción, el desempleo, la inestabilidad política y la pobreza e inequidad social son problemas estructurales que sostienen un ambiente de violencia permanente en el que la ciudadanía se siente amenazada y, en la ausencia de un proyecto político que afronte estas problemáticas, se genera un desapego social en la representatividad política de los ciudadanos.

La preocupación de la sociedad civil frente a la amenaza de la inseguridad ciudadana ha abierto oportunidades para establecer nuevas estrategias de acción en términos políticos. Un claro ejemplo es Nayib Bukele, presidente de El Salvador, que ha puesto en el punto de mira al fortalecimiento del sistema penitenciario como solución próxima a los índices de violencia que vive el país. Si bien El Salvador contaba en el año 2015 con una tasa de 106,8 homicidios intencionados por cada 100.000 habitantes, las políticas públicas de Nayib Bukele han logrado bajar, en el año 2019, a un margen total de 38,8 homicidios intencionados por cada 100.000 habitantes lo cual, ha grandes rasgos, ha afianzado altos niveles de aprobación ciudadana en su gestión administrativa (Roque, 2021).

Es importante destacar que los medios usados para la reducción de la tasa de homicidios se basan en el hacinamiento carcelario y la detención arbitraria de jóvenes de sectores populares que, según la narrativa pública del Gobierno de El Salvador, son zonas productoras de organizaciones delictivas. Esto, a parte de revictimizar a sectores sociales vulnerables, no llega afectar a las

condiciones estructurales que promueven la criminalidad ya que asume que la inseguridad es un fenómeno aislado de la coyuntura político-social (Dammert, 2023).

Debido al éxito en la reducción de la tasa de homicidios intencionados y el alto índice de aprobación ciudadana en su país, Nayib Bukele ha puesto en el debate público internacional que su modelo de gestión de la seguridad ciudadana es el camino más efectivo para generar un sentimiento de representatividad en la sociedad civil. No obstante, esto presenta un conflicto mayor ya que su propuesta no logra solventar los problemas estructurales que originan la violencia, al contrario, abren las puertas a nuevas formas de violencia a nivel institucional.

Tomando en cuenta estos antecedentes, la presente investigación tiene el fin entender cómo el debate de la seguridad ciudadana llega a incidir en los niveles de aprobación pública sobre la gestión del Gobierno del Ecuador a cargo de Guillermo Lasso. Específicamente, los sucesos de las crisis carcelarias ocurridas entre el mes de septiembre del año 2021 hasta el mes de noviembre 2022.

La selección de este periodo de tiempo se considera a raíz de que el aumento de muertes violentas ha sido uno de los temas centrales que se ha vuelto tendencia en el Ecuador en los últimos años. Según recoge el medio de periodismo de investigación GK (2023) entre el periodo de febrero del 2021 hasta noviembre del 2022, se ha contabilizado 416 personas fallecidas que han sido víctimas de las 11 crisis carcelarias que se ha producido a en los diferentes centros penitenciarios del país.

Durante el año 2021, la gestión de Gobierno Guillermo Lasso obtuvo un 74% por parte de la aprobación ciudadana. Esto se debe a que logró pasar de un 3% de población vacunada a un 62% en menos de 93 días AFP (2021). Así afirma Recalde (2022: 138) que el gobierno de Guillermo

de Guillermo Lasso obtuvo una ganancia del 90% de aprobación en el encuadre de interacciones por los medios digitales. Por ende, la relación entre ciudadanía y Gobierno empieza por un buen momento en la medida que se atienden asuntos urgentes.

No obstante, en el año 2022 el Gobierno del Ecuador decretó 4 estados de excepción: 3 de ellos debido a las crisis carcelarias y a los altos índices de violencia en el país y 1 debido a la protesta social tanto del movimiento indígena, el movimiento estudiantil y los sindicatos. El primer estado de excepción fue decretado el 29 de abril y este solo se centraba en tres provincias de la zona costera del país; Guayas, Manabí y Esmeraldas. Cabe señalar que estas regiones reflejan altos índices de desigualdad y pobreza lo cual indica que son zonas vulnerables a la influencia del crimen organizado. Según Barrera (2021: 5-6) advierte que el narcotráfico y la corrupción son las principales causales del deterioro de la alta tasa de criminalidad. Sobre todo, porque entiende que las bandas delictivas pueden generar influencia en sectores populares vulnerables, y que estos pueden desarrollar tejido social debido a la alta tasa de desempleo.

Si bien la desatención en los sectores sociales más vulnerables del país va en aumento, hay otros sectores invisibilizados que son mayormente golpeados y que, al llegar a un límite, tienden a emerger. Solo en el año 2022, las crisis carcelarias registran más de 334 reclusos fallecidos adentro de las instalaciones penitenciarias (Primicias, 2022). A pesar de ser un fenómeno social que empieza en el año 2019, el Gobierno de Guillermo Lasso no ha encontrado otra respuesta más que declarar estado de excepción en las zonas de mayor conflicto llegando así a militarizar las calles. Sin embargo, González & Armijos (2021: 15) entienden que:

“la solución tradicional que ha manifestado el estado ecuatoriano frente al aumento de la criminalidad ha sido el endurecimiento de penas que ha llevado, progresivamente, al hacinamiento de los centros penitenciarios y, por ende, al deterioro de recursos materiales y humanos”.

El Gobierno de Guillermo Lasso ha optado por seguir estrategias de contención en seguridad ciudadana similares a las aplicadas por el Gobierno de El Salvador de Nayib Bukele. Sin embargo, el hacinamiento penitenciario y la militarización de los sectores populares, no ha dado el mismo resultado en los índices de aprobación pública en la gestión de la seguridad ciudadana. A consecuencia, esta investigación plantea la necesidad de conocer la particularidad del contexto ecuatoriano en el desarrollo de las crisis carcelarias con el fin de responder si estas han sido las causas principales para que el nivel de aprobación de Guillermo Lasso pase a uno de las más bajos de la región en su primer año de gestión.

Adicionalmente, esta investigación tiene como fin identificar si el desarrollo de la opinión pública, en la medida que ocurren las crisis carcelarias, considera que la administración de la seguridad ciudadana llega a ser un eje importante en los tejidos de representatividad entre ciudadanía y Gobierno. Para ello este análisis propone una delimitación de estudio que abarca la progresión de 6 crisis penitenciarias, ocurridas entre el mes de septiembre del año 2021 hasta el mes de noviembre del año 2022, bajo la gestión del Gobierno de Guillermo Lasso. Y como análisis central, en lo que respecta al clima de la opinión pública, se recogen 6 informes de encuestas de las cuales 5 son publicadas por la agencia Click Research y 1 es publicada por la agencia Perfiles de Opinión.

Cabe mencionar que el criterio de selección, en lo que refiere a los informes de encuestas, se basa en la necesidad metodológica de obtener una muestra de datos similares que permitan evaluar de forma más cercana el clima de la opinión pública ya que la selección de muestra parte de una base de datos con segmentaciones comunes entre una agencia con otra. Además, la recopilación de datos cumple con el margen temporal que propone este trabajo de investigación.

Como parte final de esta investigación, los datos obtenidos a través de los análisis descriptivos nos dan cabida a establecer patrones de relación con variables de control a nivel nacional, como la tasa de desempleo y la tasa de homicidios intencionados, cifras recogidas de las respectivas instituciones públicas. Esto permite identificar si el clima de la opinión política cambia en secuencia con los registros nacionales lo que permite contextualizar de forma más cercana los objetivos de estudio.

## **Objetivos**

### **Objetivo General**

Analizar la importancia que tiene la seguridad ciudadana como tema de agenda pública a raíz de las crisis carcelarias en el Ecuador.

### **Objetivos Específicos**

Identificar si el fenómeno social de las crisis carcelarias fueron determinantes para el cambio de la valoración en la gestión pública del expresidente Guillermo Lasso en su primer año de mandato.

Conocer si los principales problemas del país, según la opinión pública, varían en el contexto de las crisis carcelarias con el fin de identificar su impacto en la sociedad civil del Ecuador.

### 3. Marco Teórico

#### 3.1 Comunicación Política y Gestión de Crisis en América Latina

En el escenario de la comunicación política es imprescindible entender cómo actúa la democracia en la dinámica social de la región en la que se desenvuelve. Es así como, los procesos históricos que marcaron un antes y un después en el desarrollo social de los ciudadanos, forman una íntegra base de la dinámica colectiva. No obstante, estas dinámicas se ven influidas por factores externos al ámbito político institucional en la mediación de conflictos. El caso latinoamericano, según Rincón (2004: 15):

“pasa a través de una formación ciudadana la cual ha sido imposible debido a la existencia generalizada de prácticas de exclusión de los sectores más amplios de la sociedad en la toma de decisiones, la eliminación o amenaza permanente de todo lo probable disenso, la injusticia en la distribución de recursos y el bajo acceso a la educación profesional y universitaria.”

La comunicación política actúa a través de las articulaciones discursivas de sentido en las que se manifiesta una relación de poder. Es así como la relación entre Gobierno y ciudadanía es determinante para el resultado de una relación armónica o, por el contrario, llegan a ser resultado de una apuesta caótica. No obstante, esta relación llega a ser oscilante en la que no permanece nada fijo, sino que resulta ser un recorrido constante.

Para Viñas et al. (2023: 35-36) sugieren que no es posible comunicar si no hay gestión administrativa, así como tampoco habrá posibilidad de comunicar si no hay vinculación con el territorio. Por lo tanto, es necesario que en el campo de la comunicación política, o gubernamental, se adhiera un programa de planificación en los que se reúna las demandas de los distintos sectores sociales para formar una agenda. Del mismo modo es necesario un estudio de los escenarios y el contexto histórico-social en el que se desarrolla la producción de sentidos con

el fin de generar espacios de pertenencia en el que la sociedad civil se sienta identificada. No obstante, una estrategia de comunicación política no puede ser empleada de forma particular en otra diferente región ya que no posee las mismas características históricas ni similares dinamismos sociales.

En los últimos 10 años, la situación de varios países de la región latinoamericana está arraigada a la ingobernabilidad que, además, acentúa procesos disruptivos en el que la sociedad civil no llega a tejer mecanismos de confianza o representatividad en los gobiernos. Por el contrario, esto abre las posibilidades a que el papel de los medios de comunicación tenga mayor protagonismo al momento de determinar la agenda en procesos políticos y, por ende, en campañas políticas. De ahí que, a través de las palabras de Macassi (2002: 12-13), los medios se comportan como actores políticos que influyen las culturas políticas de los ciudadanos a través del diario consumo de noticieros y periódicos, representando intereses económicos o negociando con el Estado la cobertura de las demandas sociales.

Cabe destacar que los medios de comunicación en América Latina cumplen ciertos patrones similares a pesar de las diferencias contextuales de cada país. Esto se debe a la irrupción de las plataformas digitales en la cotidianidad que, con el pasar del tiempo, han generado un papel protagónico lo que ha provocado que tanto el manejo de la información, como también la del relato, se gestionen desde entidades privadas. Esta influencia ha incurrido hasta tal punto que el imaginario sobre un posible Gobierno de turno, o un proyecto político, se personalice hacia un perfil mesiánico en la imagen de un solo individuo. Un ejemplo claro es el presidente Nayib Bukele del Gobierno del Salvador.

Debido al impacto de las plataformas digitales en el control y tránsito de la información, las corporaciones privadas de comunicación han gestionado con mayor fuerza la narrativa de la

agenda pública y, por ende, son la primera opción para emitir comunicados políticos, económicos y sociales desde diferentes entidades gubernamentales. Esto debido a que el control de la información y descentralización de los medios de comunicación no ha sido un pilar de gestión en la mayoría de los Gobiernos latinoamericanos.

Por lo tanto, la producción de contenidos informativos, propagandas o espectáculos de los diferentes países de la región son generados en sus principales centros urbanos mientras que el resto de sus territorios son relegados al simple consumo y reproducción de estos relatos. Según explica Becerra (2014: 19-20):

“la carencia de medios con misión de servicio público en una región en la que los medios de gestión estatal funcionaron como dispositivos de propaganda gubernamental realza la incidencia de los grandes grupos comerciales, dado que el interés de las grandes audiencias privilegia la oferta mercantil por sobre el uso faccioso de la comunicación.”

En la actualidad los gobiernos latinoamericanos suelen mantener una relación tensa entre sí debido a que la mayoría de sus tendencias ideológicas apuntan a un modelo de mercado privatista mientras que otros apuntan a una ruta progresista en el que lo público predomine para mantener el bienestar popular. No obstante, para llegar a posicionar en la ciudadanía cualquiera de ambas posturas, será necesario que las estrategias comunicacionales se basen en las realidades sociales en la que se manifiestan. Es decir, en palabras de Bonasso (2002: 9-10) tener coherencia entre el decir y el hacer; entre lo que sucede en la calle y lo que sucede en el palacio.

### 3.2 Seguridad ciudadana en América Latina

Latinoamérica se ha caracterizado por ser una de las regiones con más altos índices en criminalidad y victimización durante décadas. Esto debido a que la pugna de las fuerzas políticas por ocupar el capital político ha estado arraigado a situaciones de corrupción y tráfico de

influencias en las últimas décadas. Esto ha llegado a tal punto de que el nivel de confianza de la ciudadanía con proyectos políticos o gubernamentales decaiga y, por ende, el tejido social esté expuesto a diversas amenazas (Arraigada & Godoy, 2000).

Otro punto importante para tomar en cuenta es que en varios países de la región cuentan con condiciones biodiversas para producir la materia prima para la fabricación de drogas ilegales que son productos altamente demandados en América del Norte y Europa. Es así como muchos de los sitios portuarios de la región son utilizados como lugares clave para la distribución de diversas rutas exportadoras para el narcotráfico, tanto en vía terrestre como marítima (Costra, 2012).

Según un estudio del Banco Mundial del año 2011 determina que las causas de los altos índices de violencia se originan por tres diferentes factores; el tráfico de drogas, la violencia a temprana edad y la disponibilidad próxima a armas de fuego. De estos, solo el tráfico de drogas ha aumentado drásticamente un 111% el porcentaje de homicidios al año en los diferentes centros urbanos de la región. Tanto es así que, en el ranking de las 50 ciudades con mayor violencia homicida en el mundo del año 2010, 35 de ellas pertenecen a Latinoamérica que además son zonas de distribución en donde operan las redes del narcotráfico (Banco Mundial, 2011).

No obstante, es prioritario determinar de manera conceptual lo que significa seguridad ciudadana en términos sociopolíticos. Para Sánchez & Liendo (2020: 20):

“la seguridad ciudadana radica en el cumplimiento de la norma de convivencia, la resolución de conflictos y la eficiencia del sistema justicia y el sistema penitenciario, entre otros. Y que estos tengan como finalidad la protección de los derechos y libertades del colectivo ciudadano.”

Así es como entonces, lo que llamamos seguridad ciudadana es cercana al individuo ya que está adherido a una serie de normas que limitan, organizan y protegen su diario vivir. Por otra parte, para Chinchilla & Vorndran, (2018: 31) entiende que:

“en el contexto de América Latina, la seguridad ciudadana se define a través de la capacidad de los Estados, en conjunto la corporaciones privadas e instituciones públicas, así como también los individuos y asociaciones comunitarias, permitan espacios seguros para la coexistencia pacífica de todos los sectores sociales con el fin de mejorar el bienestar común.”

La seguridad ciudadana pasa a ser un conjunto estructural en el que los diferentes actores públicos y privados tienen influencia sobre él. No obstante, se demuestra que la violencia, el crimen y el miedo al crimen cohabitan en el espectro de seguridad y, tienden a ser amenazas latentes para la estabilidad de la ciudadanía (ver Figura 1).

### **Figura 1**

*Dimensiones de seguridad ciudadana*



*Nota:* Recogido de (Inter-American Development Bank, 2012)

En este sentido es importante determinar que en esta investigación se considera a la violencia como un mecanismo de relacionamiento individual y colectivo que actúa como ejecutor de justicia en el espectro de lo social. En otras palabras, la violencia es una constante construcción de medios de relacionamiento con fines destructivos, una construcción de destrucciones particulares y colectivas (Malešević, 2010).

Por otro lado, el crimen se considera un acto que amenaza la seguridad ciudadana, regional, hemisférica e internacional considerando la magnitud de su alcance. Es importante mencionar que el crimen es un método de acción que advierte cierta necesidad de coordinar individuos y medios para obtener un fin que, por lo general, radica en lo económico. En este sentido, se puede considerar que cometer un crimen no siempre va de la mano de un acto de violencia ya que no es un ejecutor de justicia, sino que es un camino ilegal para obtener un beneficio individual o colectivo (Niño, 2020).

La amenaza que supone el crimen genera un factor determinante en el campo de la seguridad ciudadana. En la Figura 1, el miedo al crimen influye en la ciudadanía hasta tal punto de que se llega a optar por medios privados para sostener un espacio que, en teoría, es administrado por parte del Estado. Entonces, el factor del miedo al crimen provoca que la seguridad ciudadana entre a un modelo de mercado en el que reorganiza las sensaciones y realidades de las ciudades. En palabras de Niño (2020: 221):

“el miedo se alcanza a configurar cuando el ciudadano no posee confianza en las instituciones, operadores de seguridad y justicia y conoce bien que el crimen puede sobrepasar las capacidades de aquellos actores regulares en la misión de brindarle protección.”

Según el informe de IPSOS del año 2018, se refleja que los principales problemas de los países de América Latina se condensan en la corrupción, el desempleo, la inestabilidad política y, a

continuación, la inseguridad (ver Figura 2). Si bien es evidente que la categoría de la inseguridad aparece en cuarto lugar, también contiene un margen del 12% con una diferencia de 5 puntos al segundo problema, el desempleo. Esto ratifica que tanto la inseguridad, como las categorías que las anteceden en primeras posiciones, son dinámicas que atentan contra el tejido y bienestar social que, con el tiempo, influirán en el mercado de la seguridad ciudadana a través de la incertidumbre, desconfianza y miedo al crimen.

## Figura 2

*Principal problema en América Latina del año 2018*

¿Cuál diría usted que es el principal problema de su país actualmente?

Total de respuestas



*Nota:* Recogido de Ipsos (2018)

A raíz del miedo al crimen en el contexto latinoamericano, el reclamo de la ciudadanía para el fortalecimiento de la seguridad pública se ha vuelto una constante en los últimos años. Pese a esto, la nula confianza en los mecanismos institucionales que tienen como fin proteger y preservar el bien social han provocado que se debilite los lazos sociales y se radicalice el proceso de individualización poblacional. Esto también ha fomentado procesos de discriminación y exclusión en la que se han perdido libertades sociales y, por lo tanto, se ha reducido el disfrute de un espacio público equitativo en sociedad. A la final, esto ha dado como resultado una demanda social de carácter punitivo acompañada de una arraigada violencia institucional como un mecanismo de primer acceso frente a cualquier amenaza (Dammert: 2007).

Debido a los grandes problemas de ámbito social que enfrenta América Latina, también se suma un problema de registro de delitos o crímenes que puedan establecer un patrón confiable sobre las causas determinantes del crimen y la violencia. En la mayoría de los países no existe una institución focalizada en recopilar de manera sistemática una serie de datos que permitan dimensionar e identificar los índices del aumento de crímenes y violencia. Lo que se suelen registrar la mayoría de las entidades públicas y privadas son las denuncias, procesos penales, lesiones físicas y psicológicas que, dependiendo de su gravedad, son consideradas como violentas o que atentan contra el bienestar ciudadano. Este registro carece de ciertos grados de confiabilidad ya que la gran diversidad de los delitos no posee conductas similares. Por ejemplo: no es lo mismo registrar un hurto que una agresión sexual ya que sus características, tanto a nivel individual como colectivo, llegan a ser diferenciales (Arraigada & Godoy 1999).

Por otra parte, las detenciones policiales y procesos judiciales no llegan a ser fiables ya que, debido a la exclusión y discriminación social, muchos de estas acciones van dirigidas a sectores sociales vulnerables que se ven afectadas por el desempleo, la poca apertura a la reinserción social y garantías de una educación de calidad. En palabras de (Sutherland, 1949: 100) en la sociedad primitiva el delincuente era esencialmente el mismo que el “extraño”, mientras que en la sociedad moderna el estereotipo está limitado, en gran parte, a la clase socioeconómica más baja.

Así es el caso que, debido a la corrupción y a la interferencia de grupos de poder, gran parte de casos no se llega a recopilar como delitos a las acciones cometidas por sectores sociales privilegiados ya que, a raíz de la influencia en medios políticos y sociales, no es posible probar su culpabilidad y, también, su influencia en el crimen a nivel colectivo. Es decir, existe una recopilación sesgada de datos que funcionan a través de mecanismos interpretativos

influenciados por prejuicios sociales y, también, por intereses económicos y políticos particulares.

Cómo último factor determinante para entender la complejidad de la seguridad ciudadana en América Latina es el sistema penitenciario ya que, debido a su importancia en la administración de justicia penal y en los procesos de rehabilitación social, determina la convivencia de las personas que son sentenciadas a la privación de la libertad, como también, su proceso de reinserción a la sociedad en el colectivo.

Para Rico & Chinchilla (2002: 35-36) el sistema penitenciario ha sido siempre el más deteriorado y descuidado por los gobiernos, encarándose su posible reforma únicamente cuando ocurren hechos de gravedad: ya sean motines con muertes, lesiones o incendios. Esto también se agudiza a raíz del progresivo hacinamiento de personas privadas de la libertad en los diferentes centros debido a las serias deficiencias en los sistemas judiciales y, también, sobre la penalización de delitos.

Tanto la falta de recursos como el hacinamiento en los centros penitenciarios provoca que, según el delito o la gravedad del crimen cometido, no se pueda separar a las personas que presenten una alta o baja amenaza para la reinserción social. Esto imposibilita establecer estrategias de seguimiento acorde a un diagnóstico particular previo de cada persona y, por ende, también ayuda a que exista dinámica de violencia interna entre los diferentes colectivos de los centros penitenciarios.

Cabe destacar que, según los informes del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Prisiones lanzados en el año 2013, existe un 154,33% de hacinamiento en la región. Del total de la población penitenciaria, existe una variante del 40–60% de reclusos que se encuentran en las

cárceles sin condena y, en menor medida, existe otro colectivo que, ya cumplida la sentencia penal, permanece en los recintos ya que no existe entidades, organismos o estrategias institucionales que puedan acogerlos para su pronta reinserción.

Tomando en cuenta que América Latina tiene graves problemas en temas de desigualdad social, se vuelve un desafío complejo elaborar estrategias o herramientas que permitan un eficaz funcionamiento de las administraciones públicas. Tanto la corrupción como el narcotráfico han generado desconfianza en los proyectos políticos por parte de la población lo que ha producido una dinámica mercado en el campo de la seguridad que ha ahondado con mayor fuerza la brecha de clases sociales y, también, de la administración del espacio público. Es así como el miedo a lo ajeno, o a lo diferente, ha aumentado el nivel de amenaza en el imaginario social que, con el tiempo, ha ido focalizando su atención en los sectores económicamente empobrecidos como focos productores de delincuencia, crímenes y violencia (Wacquant, 2010).

### 3.2.1 La mirada de los Centros Penitenciarios según Nayib Bukele

Entre la magnitud de la problemática sobre el tema de seguridad ciudadana en el continente latinoamericano, han surgido actores políticos que han presentado alternativas disruptivas que abordan la situación desde una perspectiva con confrontación directa y punitivista. Uno de los ejemplos más contemporáneos es el presidente del Gobierno de El Salvador, Nayib Bukele. En palabras de Réserve (2016: 17-18):

“en muchas ocasiones se ha situado como uno de los países como mayor incidencia de homicidios en la región de Centroamérica. Solo en el año 2015 se registró un total de 6.650 personas fallecidas lo que significó un 35.3% en los homicidios totales cometidos en la región.”

Si bien la Organización Mundial de la Salud establece que una tasa de 10 homicidios por 100.000 habitantes ya es un tema de gravedad en la salud pública, las cifras de El Salvador

demuestran que el país ha experimentado olas endémicas de violencia social. No obstante, a partir del 2019, la tasa de homicidios se ha reducido notablemente y ha mantenido un nivel estable de 38,8 homicidios por 100.000 habitantes, aunque sigue siendo una cifra alarmante para la salud pública y el bienestar social.

Uno de los principales protagonistas cuando se habla de seguridad ciudadana en El Salvador son las pandillas. Desde el año 2003 hasta el año 2019, la elaboración de políticas públicas ha sido focalizadas en atender y confrontar a estos grupos considerados delictivos. Los últimos gobiernos de El Salvador han elaborado estrategias que oscilan desde la persecución y represión hasta los llamados Acuerdos de Paz. Sin embargo, los acuerdos entre Estado y pandillas delictivas no planteaban un proyecto de reinserción social, sino que más bien estaban sostenidos por intereses económicos particulares (Von Santos 2004).

Los llamados Acuerdos de Paz han sido una oportunidad clave en la propaganda política para sostener la popularidad del presidente Nayib Bukele. Esta estrategia de comunicación se orientaba en informar a la ciudadanía que los mencionados acuerdos fueron un engaño político y que los únicos beneficiarios de ellos fueron los grupos delictivos, así como también los anteriores gobiernos de turno (Diario 1, 2020). Cabe destacar que el impacto comunicacional de su Gobierno no hubiese sido posible sin un proyecto intensivo de uso masivo de medios y plataformas digitales para mediatizar virtualmente su encuadre comunicacional en el consumo de información de la ciudadanía (Roque, 2021).

Según el reciente informe del Latinobarómetro del año 2023, el presidente Nayib Bukele cuenta con el 90% de aprobación ciudadana, el más alto de la región desde el año 1995. Esto se debe principalmente a la promoción internacional sobre su política de seguridad pública acompañada de los índices más bajos en homicidios que vive El Salvador.

La reducción significativa en la tasa de homicidios se produce por el proceso penal de, aproximadamente, 70.000 jóvenes de la población acusados de pertenecer a pandillas delictivas (Dammert, 2023). Esta cifra de detenciones son el resultado una masiva presencia policial y militar destinadas a patrullajes de zonas consideradas de conflicto.

Las detenciones arbitrarias sin un proceso judicial idóneo, y llevadas a cabo en sectores sociales vulnerables, han aumentado en gran medida procesos penales sin sentencia y que, de igual forma, tienen como destino el ingreso a los diferentes centros penitenciarios promocionados por Nayib Bukele. Es así como la estrategia de seguridad se torna en un modelo de violencia institucional que limita las libertades ciudadanas y ahonda en la revictimización de las clases populares. No obstante, este modelo de seguridad ha mostrado resultados a corto plazo. Por ejemplo: ha ayudado en la recuperación de espacios públicos y, por ende, ha facilitado la disminución de la tasa de criminalidad (Dammert, 2023).

No obstante, sin una política pública integral de seguridad y de reinserción social, el modelo de seguridad de Nayib Bukele tiene como fin el constante hacinamiento de los centros penitenciarios ya que las detenciones masivas se sustentan en la persecución y hostigamiento a las clases populares que, sin los medios económicos, políticos y sociales, no poseen las herramientas para afrontar un proceso judicial. En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha mencionado que las condiciones de captura, transferencia, aislamiento, detención y reclusión presentan graves problemas y, por ende, provocan atentados contra las garantías de derechos humanos de la ciudadanía en general. Por ejemplo, se ha denunciado un excesivo hacinamiento en cárceles y centros de detención policiales, así como también maltrato recurrente a las personas privadas de la libertad en un ambiente de condiciones insalubre que atentan contra la salud pública. (Informe Crisis Group, 2020)

Pese a esto, el presidente Nayib Bukele ha logrado promocionar, tanto a nivel nacional como internacional, que su estrategia de seguridad ciudadana es el único medio posible para establecer índices favorables en temas de prevención y control social. Sin embargo, sin un debido programa estratégico de comunicación integral en el que se tenga como fin un sistema de reparación y reinserción social, esto solo perpetuará el hacinamiento en las cárceles y la marginalidad en los sectores populares.

### 3.3 Ecuador, seguridad ciudadana y Guillermo Lasso

En el año 2008, el Ecuador fue protagonista de un nuevo proceso constitucional del cual se formaba un nuevo Estado de Derecho. En este periodo, el expresidente Rafael Correa planteaba que el campo de la seguridad debe estar en función de un sistema integral en el que, tanto la ciudadanía como las instituciones del Estado, deben articularse de manera conjunta para elaborar un programa de prevención en el que todas las demandas ciudadanas, de los diferentes sectores sociales, sean atendidas con el fin de generar una transformación cultural conjunta (Correa, 2011). Es decir, desde el proceso de la Constituyente del año 2008, los organismos del Estado tenían la función de atender las demandas públicas y así establecer programas de acción para solventarlas. Por lo tanto, existía una relación constante entre Estado – Sociedad Civil en la que la agenda pública era el foco de atención de la construcción de políticas públicas.

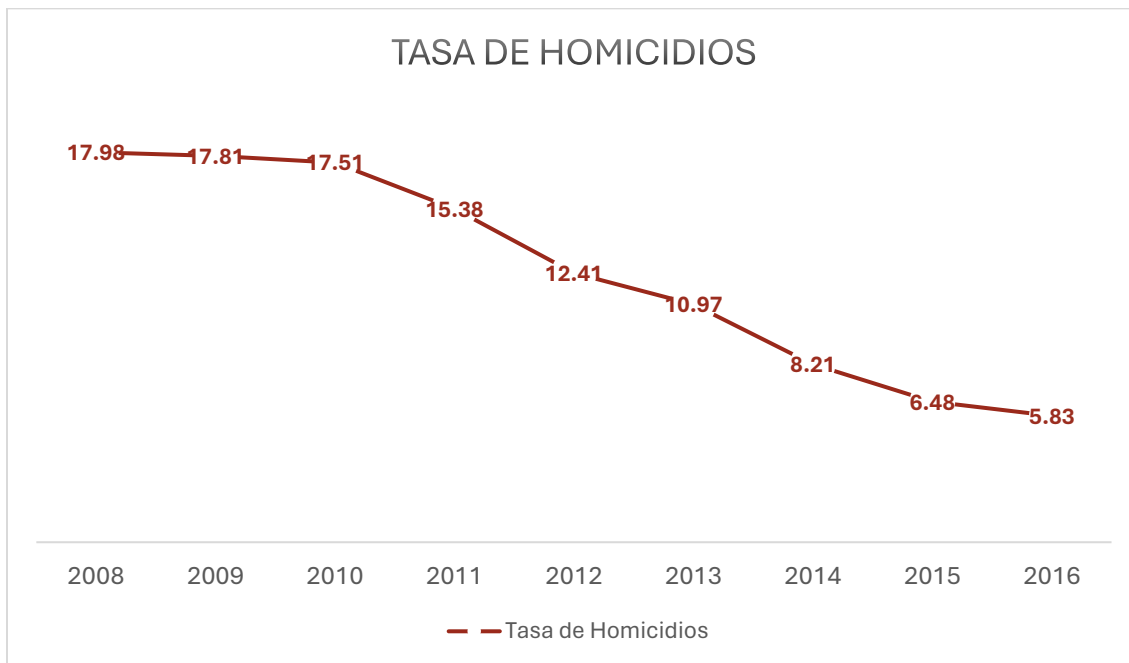
Según, Zambrano (2016: 61) una de las particularidades de la Constitución ecuatoriana del año 2008 es la gama de derechos y garantías basados en el reconocimiento de la dignidad individual, colectiva y el *Sumak Kawsay* o “buen vivir”. Es así como, desde el Plan Nacional para el Buen Vivir, se desecha la idea de “orden público” como pilar de la seguridad ciudadana ya que esta noción de “orden” parte de un producto normativo que delimita el carácter individual y colectivo las garantías de derechos y libertades de los ciudadanos. Al contrario, se pone el foco en

fortalecer la idea de que la seguridad ciudadana es un factor dependiente del bienestar social y la calidad de vida.

A raíz del Plan Nacional del Buen Vivir, Ecuador ha logrado cifras significativas en la disminución con respecto a la tasa de homicidios convirtiéndolo así en uno de los países con la tasa más baja de la región en 2016 con un 5,8 por cada 100.000 habitantes (ver Figura 3). Muy por debajo del margen en el que la Organización Mundial de la Salud consideraba un tema alarmante para la salud pública.

### Figura 3

*Tasa de Homicidios por 100.000 habitantes*



*Nota:* Recogido de [www.seguridad.gob.ec](http://www.seguridad.gob.ec) (2018)

Si bien este programa de seguridad no obtuvo un resultado contundente en la disminución de homicidios a corto plazo, logró estabilizar los índices y, con el tiempo, logró descender la tasa a cifras significativas. Es así como el sistema de seguridad integral del Plan del Buen Vivir

mantiene diferencias con los modelos tradicionales de seguridad ya que considera al ciudadano como eje transversal en procesos de seguridad individual y colectiva haciendo posible su integración, como también, su participación en políticas públicas que responden a sus necesidades desde la promoción y respeto de los derechos humanos.

A pesar de lo largo de la aplicación de la Constitución del 2008 en el territorio ecuatoriano, el año 2019 marcó un precedente de cambios estructurales en el ámbito político y social. El Gobierno de Lenin Moreno, sucesor del expresidente Rafael Correa, se empiezan a decretar los primeros Estado de Excepción como medio para frenar las movilizaciones sociales que surgen a raíz de las nuevas medidas económicas, y acuerdos comerciales, adoptadas por el Gobierno que tienen como fin afrontar la crisis económica mundial y la deuda pública. Según Arkonada (2020: 43-44) las principales preocupaciones de los sectores sociales afectados fueron: el préstamo de 4 mil millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional y la eliminación del subsidio, tanto a gasolina como diésel.

En palabras de Agamben (2005: 83) los estados de excepción señalan un umbral en el cuál la lógica y praxis se indeterminan y una pura violencia sin *logos* pretende actuar sin ningún referente real. Es decir, los estados de excepción funcionan como elementos disruptivos que quiebran un sistema de seguridad integral ya que las entidades públicas dejan de considerar al ciudadano como un eje transversal en el desarrollo y aplicación de políticas de bienestar, sino se considera como un ente amenazante que tiende a no alinearse los modelos económicos del Gobierno de turno. Por ende, la relación entre la agenda pública y la agenda institucional pasa a ser ajena a la realidad social.

A principios del año 2020 se empezaba a notar los primeros efectos sociales de la pandemia del COVID 19 y, en segundo plano, la falta de recursos en materia de salud pública en las distintas

regiones del país. A causa de esto, el Gobierno dispuso establecer una serie de Estados de Excepción con el fin de frenar el avance de la pandemia y, también, evitar la concentración de sectores sociales para una serie de posibles manifestaciones y huelgas nacionales debido a la precariedad del sistema público. En palabras de Ortiz (2020: 7) se entiende que la élite política tiende alinearse bajo el discurso de seguridad nacional para legitimar su gobernabilidad y, por ende, utiliza sus aparatos coercitivos para asegurar la estabilidad social.

Gracias a la ruptura entre Estado y sociedad civil, que se ha ido deshaciendo por las diversas implementaciones de Estado de Excepción, ha ocasionado que nuevos perfiles políticos de carácter neoliberal sean opción para la gobernabilidad en el Ecuador que, dicho sea de paso, se ha mantenido bajo un modelo progresista por más de 10 años. Es así como en el año 2021, Guillermo Lasso, candidato de corte neoliberal por la lista CREO, asciende al poder con el 52,36% de votos a su favor contra Andrés Arauz, candidato de corte progresista de la lista UNES, que lograba un 47,64%.

A pesar de contar con una diferencia de victoria menor 5 puntos, el plan de Gobierno de Guillermo Lasso se centraba en solventar de manera rápida la creciente ola de contagios que se propagaba a raíz de la pandemia. En otras palabras, uno de los principales motivos de su victoria fue el interés por atender las demandas de la agenda pública. Cabe destacar también que, otra de las principales razones de su victoria, fue la crisis de legitimidad política por la que atravesaba el Gobierno del expresidente Lenin Moreno debido a los casos de corrupción que, directa o indirectamente, afectaban al candidato opositor Andrés Araúz (Le Quang: 2021).

A pesar de haber empezado con un 74% de aprobación en sus primeros meses de gestión, el expresidente Guillermo Lasso aún afrontaba una crisis social que se ha ido acrecentando debido a los altos índices de desempleo y pobreza que mantenía el Ecuador.

Por un lado, la agenda institucional del Gobierno de Guillermo Lasso estaba focalizada en centrar sus recursos en el plan de vacunación en 100 días el cual logró pasar de 3% a un 62% de población vacunada en menos de 97 días. Esto ha permitido que el Gobierno contase con uno de los índices más altos de aprobación en la región dando cuenta así que la relación, entre agenda pública y agenda institucional, estaban encaminadas en la misma dirección. Por otra parte, debido al desmantelamiento del sector público por parte del Gobierno de Lenin Moreno, el Gobierno de Guillermo Lasso afrontaba cifras de pobreza y pobreza extrema de 28,5% y 7,6% respectivamente (CEPAL, 2022).

A raíz de la imposición de políticas de carácter neoliberal, tanto la flexibilización laboral como el recorte en el gasto público y la privatización de sectores estratégicos, aumentaron significativamente el coste de vida de las regiones populares del país (Barrera, 2021). Esto ha producido que los sectores con altos índices de desigualdad y pobreza estén a merced de la intervención del crimen organizado y estos se vuelvan su motor financiero de subsistencia. Tanto el narcotráfico como la corrupción institucional han determinado el futuro de los sectores populares debido al olvido de las políticas de Estado.

A partir del nuevo rumbo político que ha tomado las políticas públicas del Ecuador, bajo la administración de Lenin Moreno como la de Guillermo Lasso, se ha notado un cambio significativo en los índices de homicidios por cada 100.000 habitantes que, periódicamente, ha ido superando radicalmente los índices de emergencia postulados por la OMS. A partir del año 2021, periodo en que Guillermo Lasso asume la presidencia del Ecuador, se duplica la tasa de homicidios dando cuenta así que hay una grave desatención preventiva en los sistemas de seguridad ciudadana y control social (ver Figura 4).

#### Figura 4

*Tasa de Homicidios por 100.000 habitantes*



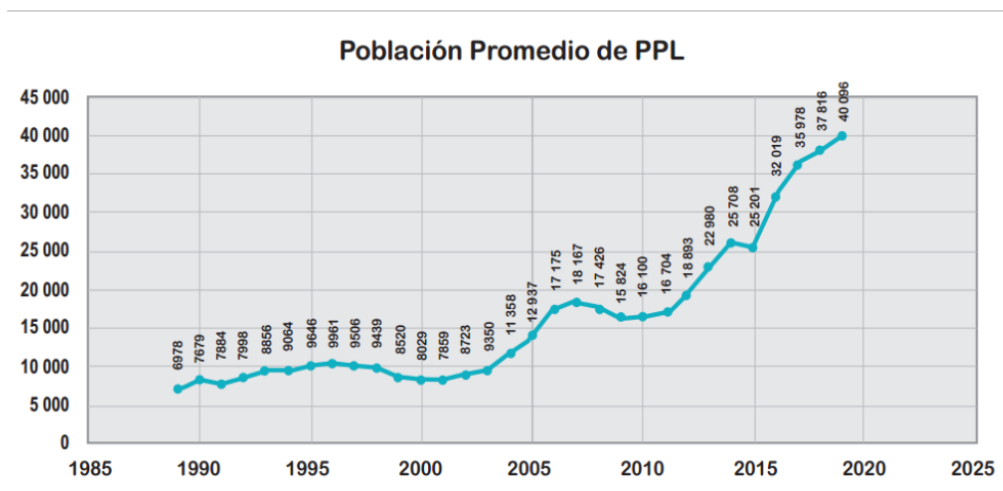
*Nota:* Recogido de [www.seguridad.gob.ec](http://www.seguridad.gob.ec) (2023)

En consecuencia, el Gobierno de Guillermo Lasso ha intentado mantener su porcentaje de valoración ciudadana redireccionando la responsabilidad a administraciones anteriores a su gestión. Es decir, el aumento de la criminalidad, la tasa de homicidios como también las crisis penitenciarias, son responsabilidad de la administración de Lenin Moreno como la de Rafael Correa que, a través de sus políticas públicas, han permitido al libre tránsito de bandas criminales dedicadas al narcotráfico. También se ha llegado a sostener que la inversión en el gasto público de la última década ha sido determinante para el aumento de la deuda pública y, por ende, los recortes de presupuestarios han debilitado zonas estratégicas de prevención y control social (Jácome & Jordán, 2022).

Frente a la desatención del Gobierno hacia los sectores sociales estratégicos, otros colectivos de mayor vulnerabilidad se enfrentan a nuevos escenarios de precariedad ocasionadas por el debilitamiento del sistema público. Solamente en el año 2022, se ha registrado un total de 334 personas fallecidas adentro de las instalaciones penitenciarias (Primicias, 2022). Como respuesta, el Estado ha centrado su ofensiva en decretar, y extender, estados de excepción con el fin de poder militarizar las zonas de conflicto y, con ello, poder desarticular las bandas delictivas y el microtráfico adentro de los centros penitenciarios. Sin embargo, estas estrategias que tienen como fin endurecer penas que afectan tanto a las estrategias de persecución, detención y dictamen penal provocan el hacinamiento de los centros penitenciarios y, por ende, el deterioro de los recursos humanos y materiales de estos. (González & Armijos, 2021).

**Figura 5**

*Población Promedio de las personas privadas de la libertad*



*Nota:* Recogido de Defensoría del Pueblo Ecuador: Promedio anual de personas privadas de la libertad (1989-2019)

Tomando en cuenta el crecimiento de la población carcelaria (ver Figura 5), es evidente que las preocupaciones del Gobierno central poseen claras faltas de conocimiento sobre la situación

actual de las personas privadas de la libertad y sus condiciones de vida. Si bien se considera que los recursos materiales no son suficientes para precautelar el orden adentro de los Centros de Rehabilitación Social, es también necesario desarrollar una serie de diagnósticos para develar cómo, entre los años 2021–2022, se han suscitado un alto número de muertes violentas asumiendo que esta problemática es un fenómeno estructural y, por ende, también está relacionada con diversos factores externos. Uno de ellos está atravesado por el aumento poblacional de personas privadas de la libertad que tiene una tasa de crecimiento exponencial entre el año 2005 al 2020.

### 3.3.1 El recorte presupuestario como estrategia política

En el año 2019, Ecuador contaba con 40.096 personas privadas de la libertad frente a una capacidad instalada de 28.554 puestos. Es decir, en ese año existía un desfase de 40,42% de sobrepoblación carcelaria en el país.

Debido a la sobrepoblación penitenciaria; tanto las celdas, camas, kits de aseo, alimentación y diversos materiales de cuidado personal no eran los suficientes para abastecer a la gran magnitud de reos en las penitenciarías. Esto también provocaba que los materiales de primera necesidad se vuelvan bienes de gran valor en los que se constituía un mercado interno y, por lo tanto, el control de este mercado promovía pugnas y conflictos que se fueron acrecentando en medida que aumentaba la escasez de recursos e infraestructura (García, 2023).

Sumado a las pugnas internas por el control del micro-mercado de los centros penitenciarios, las aprehensiones a integrantes de bandas delictivas también han provocado un fenómeno particular en los centros ya que los mismos se han convertido en territorio de disputa en los que se instaura diversos mecanismos de corrupción estructural y, por ende, institucional. El control del centro, o

de un pabellón, supone también un punto de capital económico ya que la accesibilidad de ciertas mercancías está regulada por los órganos de control estatales que se ven, poco a poco, infectadas por la corrupción.

Esto sucede en gran parte por la ausencia de presupuesto que ha generado sistemáticamente un debilitamiento continuo del control estatal en las cárceles ya sea en políticas públicas como en infraestructura material y humana. A la par, esto ha permitido a las organizaciones criminales adoptar ciertos niveles de control en los que se ha llegado a un “autogobierno” al interior de los centros penitenciarios. (Pontón, 2022).

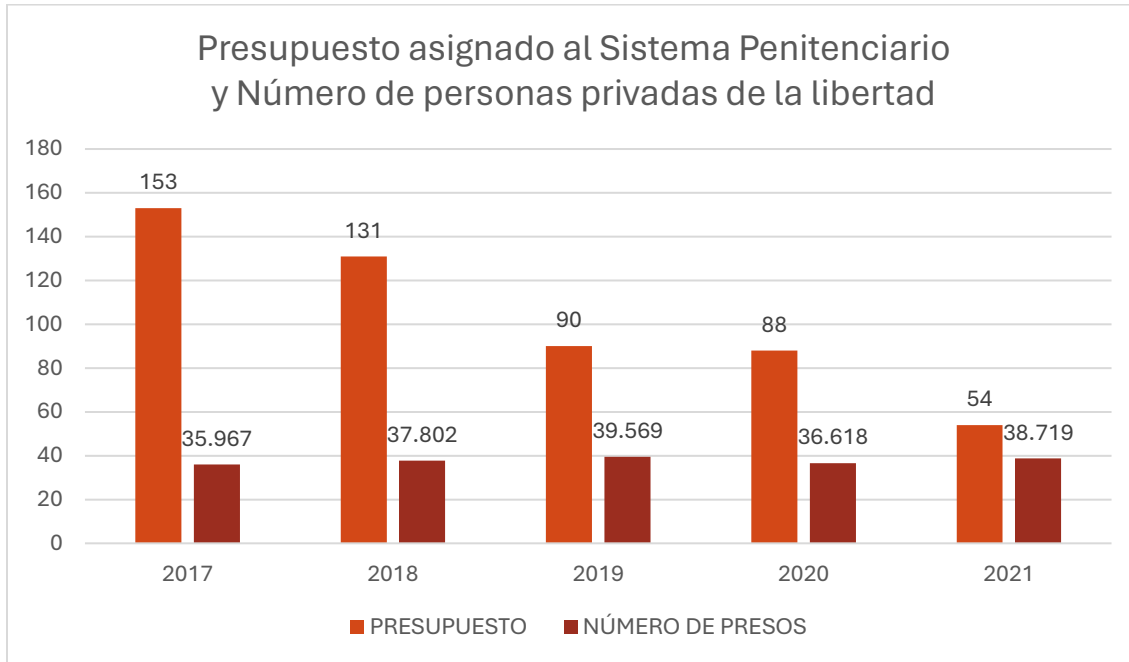
Debido a la frágil capacidad de control por parte del Estado al interior de los centros de rehabilitación social, se ha permitido que la gran diversidad de personas privadas de la libertad ocupe los mismos espacios independientemente del crimen cometido, o del cumplimiento de sentencia, y esto ha provocado que las minorías vulnerables estén a merced de la influencia o extorsión de las bandas delictivas. En palabras de Álvarez, C. (2022: 15):

“los presos que han cometido delitos menores, muchos de los cuales están en prisión preventiva o ya han cumplido la mayor parte de su sentencia, la precariedad de sus condiciones de vida hace que sean fácilmente reclutados por parte del crimen organizado, ya que no tienen otra opción para sobrevivir.”

La asignación de presupuesto público fue muy determinante para el deterioro del sistema penitenciario. Es evidente que desde el año 2017 hasta el año 2020 hubo un recorte significativo de más del 40% del presupuesto asignado en el año 2016 que, cabe detallar, fue el año con la menor tasa de homicidios en la región (ver Figura 6). No obstante, el Ecuador ya tenía una tasa de sobrepoblación significativa antes de la gestión de Guillermo Lasso.

**Figura 6**

*Presupuesto asignado al Sistema Penitenciario y Número de PPL*



*Nota:* Recogido de SNAI

Como se ha mencionado antes, en el periodo de Gobierno de Lenin Moreno, ha optado por recortar el gasto público en sectores estratégicos debido a la crisis financiera, como también, a la deuda pública originada por la inversión que suponía un Estado de bienestar. Es decir, bajo la premisa de reducir el coste estatal, el Gobierno de Lenin Moreno redujo radicalmente el presupuesto del sistema penitenciario lo que provocó que el mantenimiento de las estructuras, la contratación de nuevos guías penitenciarios y la implementación de nuevas medidas de seguridad sean escasas. Mientras que, por otro lado, el sistema judicial mantenía sus funciones sentenciando a más personas a la reclusión y, por ende, la capacidad de sostener el sistema penitenciario se reducía a manera exponencial (Álvarez, 2022).

En cambio, el Gobierno de Guillermo Lasso sufrió el colapso del sistema penitenciario afrontando así 4 crisis carcelarias en su primer año de gestión. Tanto los amotinamientos, como la violencia al interior de los centros penitenciarios, fueron narrativas mediáticas suficientes para atribuir responsabilidades a los partidos opositores y administraciones anteriores a su gestión. No obstante, para el control de esta crisis, el Gobierno optó por una serie de medidas punitivas para apaciguar el caos social que provocaban las crisis penitenciarias. Sin embargo, para Sánchez y Granados (2023: 297) las estrategias de Guillermo Lasso para combatir los índices de violencia en el territorio están ligados a la visión moralista sobre el problema de drogas que ve la represión y el control como vía para frenar este problema.

Tomando en cuenta las consideraciones ya mencionadas, esta investigación tiene como finalidad demostrar que los sucesos de las crisis carcelarias fueron factores determinantes para el cambio de los índices de aprobación del Gobierno de Guillermo Lasso en la opinión pública. Si bien las estrategias de comunicación política en América Latina individualizan el proyecto de Gobierno a un perfil político, esto también permite que la asociación tanto de políticas públicas, como de las crisis sociales, estén vinculadas a la gestión de este perfil. Por lo tanto, es posible establecer una relación dependiente entre el Gobierno de Guillermo Lasso con las crisis carcelarias dentro de un marco de comunicación política.

En consecuencia, el alto índice de aprobación con el que empezó la gestión del Gobierno de Guillermo Lasso permite entender la magnitud de variación que tuvieron estos índices mientras sucedían las crisis carcelarias. Por otra parte, también es necesario identificar si las preocupaciones de la ciudadanía varían en la medida que avanza la gestión del Gobierno de Guillermo Lasso para conocer el impacto del campo de la seguridad ciudadana en la agenda pública.

#### **4. Hipótesis.**

El presente trabajo de investigación plantea un análisis exploratorio en el cual se propone establecer un proceso de verificación de una determinada hipótesis ya obtenida de las revisiones de fuentes secundarias.

La hipótesis radica en que las crisis carcelarias, como expresiones catárticas que sugieren una debilidad institucional en el proyecto de un Estado de bienestar, tuvieron un papel determinante sobre la variación de la opinión pública con respecto a la gestión del Gobierno de Guillermo Lasso que empezó con los índices más altos de aprobación ciudadana en la región.

Esto quiere decir que el declive progresivo del nivel de aprobación del Gobierno de Guillermo Lasso fue afectado por los sucesos periódicos de las crisis carcelarias que llegaron a tener incidencia en la opinión pública y, por ende, produjo que el Gobierno del Ecuador pase de tener uno de los más altos índices de aprobación de la región al más bajo en menos de un año de gestión.

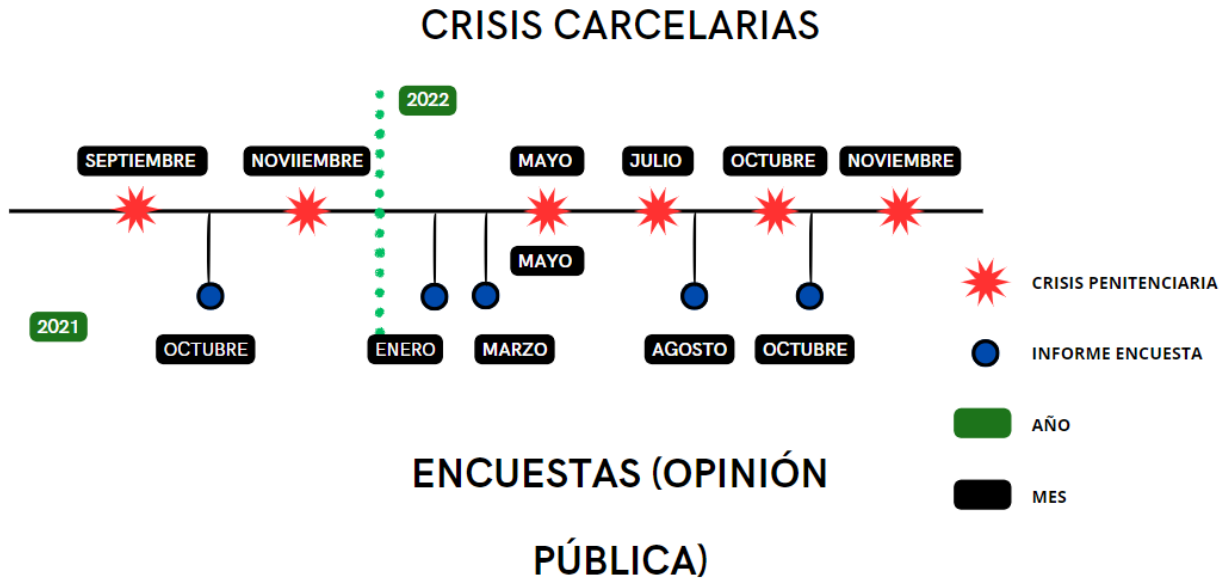
## **5. Marco Metodológico**

Este trabajo de investigación propone un estudio exploratorio de características interpretativas en el que se plantea un análisis descriptivo para entender la variación de la opinión pública referente a la gestión del Gobierno de Guillermo Lasso en el contexto de las crisis carcelarias en su primer año de gestión. Por lo tanto, este trabajo establece una línea de tiempo que abarca un total de 7 crisis carcelarias en el que la primera de ellas sucede en el mes de septiembre del año 2021 hasta la última que ocurre en el mes de noviembre del año 2022 (ver Figura 7). Es decir, se toma en cuenta las crisis ocurridas en los meses de septiembre (2021), noviembre (2021), mayo (2022), julio (2022), octubre (2022) y noviembre (2022).

Con respecto a la línea de tiempo anteriormente establecida, también se recogen 6 informes de encuestas publicadas trimestralmente por la agencia de comunicación ecuatoriana Click Research las cuales contienen una muestra de 760 personas de las principales ciudades del país; Quito, Guayaquil y Cuenca. Cabe destacar que estos informes fueron realizados en los meses de octubre (2021), enero (2022), marzo (2022), mayo (2022), agosto (2022) y octubre (2022) facilitando así un registro periódico sobre el clima de la opinión pública (ver Figura 7).

**Figura 7**

*Crisis carcelarias y encuestas de opinión pública*



*Nota:* Elaboración propia / SNAI, Click Report

De los informes anteriormente mencionados se han seleccionado dos variables cualitativas: la valoración de la gestión de Guillermo Lasso y el principal problema actual del país. La primera variable cualitativa es de característica dicotómica y, para intereses de esta investigación, se ha seleccionado la opción “positiva” con el fin de conocer su evolución entre los diferentes reportes.

Por otra parte, la segunda variable cualitativa seleccionada es de característica politómica y se ha recogido 4 opciones principales: economía, seguridad ciudadana, desempleo y corrupción. Esta selección de opciones permitirá contrastar las preocupaciones periódicas de la ciudadanía en el contexto de las crisis carcelarias.

A partir de la selección de variables, con sus respectivas opciones, se procede a emplear un análisis descriptivo comparativo entre los diferentes reportes de la agencia Click Research con

respecto a la línea de tiempo de los sucesos de las crisis carcelarias. En este sentido, la relación de informes y crisis quedarían de la siguiente manera:

- Los índices del informe del mes de octubre (2021) se relacionan con la crisis carcelaria situada el mes de septiembre (2021)
- Los índices del mes de enero (2022) corresponden a la crisis del mes de noviembre (2021)
- Los índices del mes de marzo (2022) facilitan entender el clima de la opinión pública previa a la crisis del mes de mayo (2022)
- Los índices del mes de mayo (2022) facilitan entender el clima de la opinión pública unos días después de la crisis carcelaria del mes de mayo (2022)
- Los índices del mes de agosto (2022) corresponden a la crisis del mes de julio (2022)
- Los índices del mes de octubre (2022) corresponden a los días posteriores de la crisis penitenciaria del mes de octubre (2022)

Cómo es evidente en la Figura 7, desde el mes de noviembre del año 2021 hasta el mes de mayo del año 2022, no ocurre una crisis carcelaria relevante y, por lo tanto, existe un lapso en el cual el informe de marzo (2022) no tiene relación cercana a un conflicto social previo. No obstante, para intereses de esta investigación, el análisis de este informe es relevante ya que permite sostener una periodicidad viable con respecto al clima de la opinión pública.

Este estudio también recopila los informes publicados en el año 2020 y 2023 por la Corporación de Opinión Pública Latinoamericana, Latinobarómetro. Cada uno de estos informes cuentan con un registro total de 1200 personas entrevistadas a nivel nacional con un nivel de confianza del 95%.

De estos informes se extraen las siguientes 2 variables cualitativas: confianza en el presidente y principal problema del país. La primera de estas variables es de carácter dicotómica y, a efectos de esta investigación, se selecciona la opción “positiva” para establecer un contexto previo del clima de la opinión política. La segunda variable es de carácter politómica del cual se han seleccionado 4 opciones que son: economía, seguridad ciudadana, desempleo y corrupción. Esta selección de opciones permite contextualizar un antes y un después del clima de la opinión pública con respecto a la gestión del expresidente Guillermo Lasso.

Con la finalidad de contrastar la variación de los índices de la opinión pública con respecto a las cifras oficiales publicados por los organismos públicos del Ecuador, esta investigación también adhiere los reportes de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo -ENEMDU publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, en el año 2021 y 2022. Estos informes cuentan con registros trimestrales con una muestra de 27,048 viviendas durante cada año.

En lo que respecta a los informes mencionados, se recoge la variable de control: desempleo. Esta selección tiene como finalidad un ejercicio de relación comparativa con las diferentes variables seleccionadas de los reportes emitidos de la agencia de comunicación Click Research.

Y, por último, esta investigación también reúne los índices oficiales de la Comisión Especial de Estadísticas de Seguridad, Justicia y Transparencia publicados a través del INEC en el año 2021 y 2022. De estos reportes se recoge el total trimestral de los homicidios intencionales ocurridos durante cada año con el fin de evaluar la variación de la tasa de criminalidad con respecto a los índices del clima de la opinión pública seleccionados de la agencia Click Research (ver Figura 8).

En síntesis, la selección de datos para el siguiente análisis consta de 2 variables cualitativas que, a través de sus análisis descriptivos, serán contrastadas con 2 variables de control con el fin de contextualizar el desarrollo de la opinión pública en la medida que ocurren las crisis carcelarias.

### Figura 8

*Variables, datos y fuentes de la investigación*

<u>Tipo</u>	<u>Variables</u>	<u>Datos</u>	<u>Fuentes</u>	<u>Muestra</u>
<i>Cualitativa</i>	Valoración gestión Presidencial	- Buena	-Agencia de comunicación Click Research -Agencia Perfiles de Opinión	-670 personas entrevistadas -760 personas entrevistadas
<i>Cualitativa</i>	Principal problema del país	-Economía -Seguridad ciudadana -Desempleo -Corrupción	-Agencia de comunicación Click Research	-670 personas entrevistadas
<i>Control</i>	Personas en situación de desempleo	-Desempleado	-Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU)	-27.048 viviendas (trimestrales 2021 -2022)
<i>Control</i>	Homicidios Intencionales	-Homicidios Intencionados	-Comisión Especial de Estadísticas de Seguridad, Justicia y Transparencia	-7.319 personas fallecidas (2021-2022)

*Nota:* Elaboración propia.

## **6.- Análisis**

Esta investigación se desarrolla por medio de estudios exploratorios a través de análisis descriptivos de los diferentes reportes de encuestas mencionados en el anterior capítulo. En este sentido, esta investigación presenta un estudio exploratorio secuencial derivado de la periodicidad de los sucesos de las crisis carcelarias en el primero año de gestión presidencial de Guillermo Lasso entre el periodo 2021 – 2022.

No obstante, para establecer un acercamiento al contexto del clima de la opinión pública anterior a la llegada de Guillermo Lasso a la gestión presidencial del Ecuador, es necesario anexar un análisis descriptivo de los informes de encuestas emitidos por la corporación Latinobarómetro en el año 2020 y 2023.

### **6.1 Antes de las crisis carcelarias y Guillermo Lasso.**

Según el informe de encuestas publicado por la corporación Latinobarómetro en el año 2020, se evidencia que la confianza en la gestión presidencial cuenta con un 10% a favor lo que sugiere que la agenda pública no estaba conforme con respecto a los intereses de la agenda institucional.

Cabe destacar que, desde el mes de mayo del año 2017 hasta el mes de mayo del año 2021, el expresidente Lenin Moreno estaba a cargo de la gestión presidencial del Gobierno de Ecuador. En este sentido, este informe también sugiere que existe una desafección de la ciudadanía con el proyecto político que representa Lenin Moreno antes de la llegada de Guillermo Lasso a la presidencia.

Los índices de confianza en el Gobierno, en aquel año, eran los más bajos de la región lo cual sugiere que la ciudadanía demandaba situaciones urgentes que el Gobierno de Lenin Moreno no tenía la capacidad o el interés, para poder solventarlos. Según este informe, uno de los

principales problemas del país era la economía que contaba con un margen de 18,30% del total de las 1200 personas entrevistadas.

Las políticas de flexibilización laboral, más la influencia de la pandemia del COVID -19, tuvieron un impacto crucial en el mercado laboral del Ecuador Según Esteves (2020: 37):

“la tasa de participación global activa tuvo un declive de 6 puntos mientras que la tasa nacional de desempleo se incrementó 8.8 puntos y, para el mes de junio del año 2020, la tasa de nacional de desempleo llegó hasta los 13.30%. Es decir, un total de 643.420 personas en situación de desempleo adicionales.”

Sin embargo, la segunda preocupación de la ciudadanía era la corrupción con un margen de 17,80% del total de personas entrevistadas. Menos de 1 punto de diferencia con respecto al principal problema del país. La cercanía de ambas variables radica en que uno de los principales problemas que tuvo el Gobierno de Lenin Moreno fue el tráfico de influencias en el que la sanidad pública fue una de las mayores afectadas en el contexto de la pandemia. A raíz de esto, tanto la privatización de sectores estratégicos como la desafección ciudadana, se fue acrecentando más con relación al proyecto político y sus instituciones.

La tercera preocupación principal es el desempleo que cuenta con un 10,30 % del total de personas entrevistadas. Si bien esta variable está relacionada de forma directa con el indicador de economía, también esta se presenta como una de las preocupaciones relevantes que se asumen como problemática social independiente en la ciudadanía. Además, la flexibilización laboral ha intervenido en las dinámicas de garantías de empleos de largo plazo lo que ha provocado el auge de contratos ocasionales, subempleo y un aumento considerable en la situación de empleo informal (Esteves, 2020).

En este mismo año, una de las preocupaciones que menor impacto tenía en el reporte de la corporación Latinobarómetro era la seguridad ciudadana que contaba con 1,50% del total de

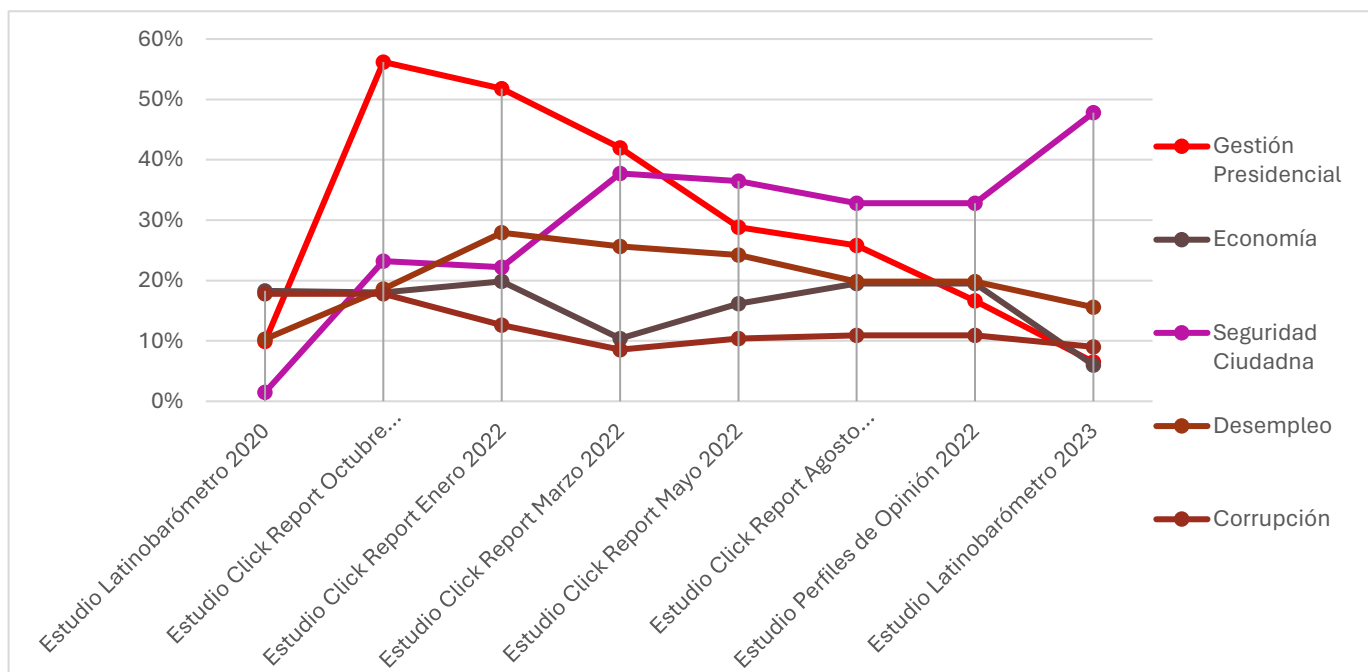
1200 personas entrevistadas. Esto quiere decir que, para la agenda pública, el tema de seguridad ciudadana no era una situación prioritaria que atender a pesar de contar con una tasa de homicidios intencionales de 7,2 por cada 100.000 habitantes según la Comisión Especial Interinstitucional de Estadísticas de Seguridad Ciudadana y Justicia. Una cifra cerca al límite alarmante que sugiere la Organización Mundial de Salud que redondea la cifra de 10 por cada 100.000 habitantes.

### 6.2 El clima de la opinión pública en la gestión de Guillermo Lasso.

Con el fin de identificar la variación de la opinión pública con respecto al desarrollo de las crisis carcelarias, cada informe de encuesta publicada por la agencia Click Research está anexada a una crisis carcelaria próxima lo que permitirá establecer un seguimiento conjunto de los diferentes indicadores a evaluar en esta investigación (ver Figura 9).

**Figura 9**

*Evolución de los índices de valoración ciudadana*



*Nota:* Elaboración propia / Latinobarómetro y Click Research

En relación con la crisis carcelaria del mes de septiembre del año 2021, en la Figura 9 se puede evidenciar el impacto que este tuvo en la opinión pública sobre la base de los datos del estudio Click Research del mes de octubre del 2021. Este reporte indica que la aprobación de la gestión presidencial contaba con un 56% de un total de 760 personas entrevistadas en las principales ciudades del país. Mientras que, en el mismo estudio, el nivel de preocupación por el tema de seguridad ciudadana contaba con un 23% posicionándose como el principal problema del país a resolver según los criterios de la ciudadanía.

Con 5 puntos de diferencia del principal problema del mes de octubre del 2021 se ubican los siguientes indicadores: desempleo con un 18,5%, economía con 18% y corrupción con un 17,8%. En este sentido, tanto el desempleo como la economía están relacionados por la situación financiera local de cada región. No obstante, la percepción ciudadana los asimila como problemáticas independientes que afectan el desarrollo socioeconómico general del país. Por otra parte, el índice de corrupción también se presenta como una problemática ciudadana a considerar ya que cuenta con menos de un punto de diferencia entre los índices de economía y desempleo.

En relación con la crisis carcelaria ocurrida en el mes de noviembre del año 2021. Los indicadores del reporte de la agencia Click Research del mes de enero del año 2022 toman ligeros cambios. Por ejemplo, el índice de aprobación de la gestión presidencial baja a un 51,8%, un total de 5 puntos menos de diferencia con el anterior reporte. No obstante, aún mantiene un nivel alto de aprobación con respecto a la gestión del Gobierno anterior del expresidente Lenin Moreno.

En lo concerniente a la variable del principal problema del país, el índice de desempleo se posiciona como el primer problema con un margen de 28% del total de personas entrevistada. Es decir, con un margen de 8 puntos a favor con respecto al anterior reporte. Mientras que el índice

de seguridad ciudadana se ubica como segundo problema nacional con una cifra alrededor del 22%, un punto menos al anterior reporte.

A partir de este periodo se puede considerar que tanto el desempleo como la seguridad ciudadana son los dos principales problemas que superan, cada una, el margen del 20% del total de 760 personas entrevistadas de las principales ciudades del Ecuador. Si bien no se puede establecer una relación académica entre el aumento similar de una categoría con otra, se puede asumir que el aumento de ambas corresponde a un problema social que el Gobierno no está siendo capaz de atender.

Por otra parte, el índice de economía se mantiene con un 19,8%, con un punto de diferencia a favor con respecto al anterior reporte. Mientras que el índice de corrupción baja a una cifra de 5 puntos obteniendo un total de 12,6% de la ciudadanía. En este sentido, el problema de corrupción pasa a ser la problemática con menor interés de la ciudadanía y esto sugiere que la demanda de la agenda pública radica en otros espacios sociales.

Como muestra la Figura 9, el reporte de la agencia Click Research del mes de marzo del año 2022 demuestran que el índice de aprobación de la gestión presidencial desciende a un total de 41,9%, 10 puntos de diferencia con respecto al informe anterior. A partir de este periodo se marca una tendencia descendente de gran magnitud con respecto al inicio de la gestión de Guillermo Lasso. Si bien el nivel de aprobación aún es favorable con respecto a gestiones presidenciales predecesoras a su Gobierno, esto evidencia que existen problemáticas sociales que afectan de forma directa a la imagen de su proyecto político y que la agenda institucional no logra abarcar todas las demandas de la agenda pública.

Por otra parte, el índice de seguridad ciudadana asciende nuevamente como principal problema del país con un margen de 37,7%, marcando así 15 puntos de diferencia a favor con respecto al anterior reporte. Esto indica que el impacto de las dos primeras crisis carcelarias recién llega a tomar una relevancia importante en la agenda pública y, simultáneamente, ponen el foco de atención en la agenda política.

Por otra parte, el índice de desempleo se mantiene con un margen de 25,6% con 2 puntos de diferencia al anterior reporte ubicándose, así como el segundo problema principal del país. No obstante, el índice de economía baja 9 puntos a diferencia al anterior reporte obteniendo un 10,4% del margen total de las personas entrevistadas. Si bien se ha comentado que tanto la economía como el desempleo están relacionados en el área de micro y macro mercado, también estas tienen una gran amplitud de diferencia entre las preocupaciones generales de la ciudadanía.

Según el reporte de marzo del año 2022 publicado por la agencia Click Research, el índice de corrupción obtiene una cifra de 8,5% del total de personas entrevistadas. Es decir, hay una diferencia en contra de 4 puntos con respecto al anterior reporte ubicándose como el valor más bajo en su índice en el primer año de gestión del Gobierno de Guillermo Lasso.

Con respecto a la crisis carcelaria del mes de mayo del año 2022, el reporte emitido por la agencia Click Research a días posteriores a la crisis, demuestran que el índice de aprobación de la gestión presidencial decae a un total de 28,8%, lo que significa que obtiene 13 puntos de diferencia con respecto al anterior reporte. Esto sugiere que la anomalía de las crisis carcelarias ahonda de forma más contundente en el clima de la opinión pública con respecto a la imagen y el proyecto político que representa el Gobierno de Guillermo Lasso.

En este mismo reporte, el índice de seguridad ciudadana se mantiene con 36,4% manteniéndose como el principal problema del país. Esto sugiere que la opinión pública determina una relación entre las crisis penitenciarias y la seguridad ciudadana y, por lo tanto, se parece que determina una relación de responsabilidad de lo que ocurre en los centros penitenciarios con respecto a las funcionalidades del Estado.

El índice de desempleo se mantiene al margen de un total de 24,2%, ubicándose como segundo problema principal del país. Mientras que, el índice de economía sube exponencialmente 6 puntos con respecto al informe anterior obteniendo un total de 16,1%. En este sentido, cabe mencionar que la distancia entre desempleo y economía se va acortando en el clima de la opinión pública teniendo en cuenta que ambos parten del sistema financiero nacional.

El índice de corrupción se mantiene estable con un 10,4% del total de personas entrevistadas posicionándose como la menor preocupación de la ciudadanía. Esto evidencia que el clima de la opinión pública ya no se centra en gran medida sobre el tráfico de influencias como pasaba en el Gobierno de Lenin Moreno, sino que gran magnitud de su atención está enfocado al campo de la seguridad ciudadana que deviene del impacto de las crisis carcelarias en el país.

Con respecto a la crisis carcelaria del mes de junio del año 2022, el informe de encuestas de la agencia Click Research del mes de agosto del mismo año sostiene que la aprobación de la gestión presidencial consta de un total de 25,8% a diferencia de 3 puntos con el informe anterior. Esto quiere decir que se forma una tendencia decreciente en el clima de la opinión pública con respecto a la confianza de la ciudadanía con el Gobierno de Guillermo Lasso.

Mientras que, el índice de seguridad ciudadana se mantiene en un margen de 32,8% con diferencia de 4 puntos al anterior informe. Si bien esto también indica una tendencia decreciente,

el campo de la seguridad ciudadana se establece como el principal problema del país en la medida que ocurren las crisis carcelarias.

Por otra parte, el desempleo se ubica como segundo problema principal del país con un margen de 19,8% a 5 puntos de diferencia menor al informe anterior. Mientras que, el índice de economía obtiene un total 19,5%, con diferencia a favor de 3 puntos. En este mes, tanto la categoría de economía como el desempleo van a la par como segundo problema principal del país lo que indica que, para la ciudadanía, ambas categorías tienen el mismo nivel de impacto en su situación personal y general del país.

En el índice de corrupción, el margen se mantiene estable con un 10,9%, similar al informe anterior. Esto indica que el marco de corrupción no ha sido un tema que se haya manifestado de forma relevante en la percepción de la ciudadanía entre los principales problemas del país durante el primer año de gestión del Gobierno de Guillermo Lasso.

Con respecto a la crisis carcelaria del mes de octubre del año 2022, la agencia encuestadora Perfiles de Opinión emite, en el mismo mes, un informe de encuestas que advierte que la aprobación de la gestión presidencial abarca 16,6% del total de 622 personas encuestadas. Esto demuestra que existe 9 puntos menos con diferencia al anterior reporte. No obstante, este informe de encuestas no adhiere preguntas sobre el principal problema del país o situación personal lo cual no permite triangular causas comunes en el malestar del clima de la opinión pública.

Tomando en cuenta la evolución de las distintas variables en el primer año de gestión del Gobierno de Guillermo Lasso se puede evidenciar que el cambio en la valoración ciudadana fue tomando una tendencia decreciente en la medida que avanzaban las crisis carcelarias.

Simultáneamente, según los análisis de los reportes de encuestas considerados en esta investigación, sugieren que el clima de la opinión pública tuvo una reestructuración sobre la consideración de cuáles son los principales problemas del país posicionando a la seguridad ciudadana como el primer problema restando así el impacto de los demás problemas y aumentando su margen de distancia.

### 6.3 Entre los registros del Estado y la opinión pública

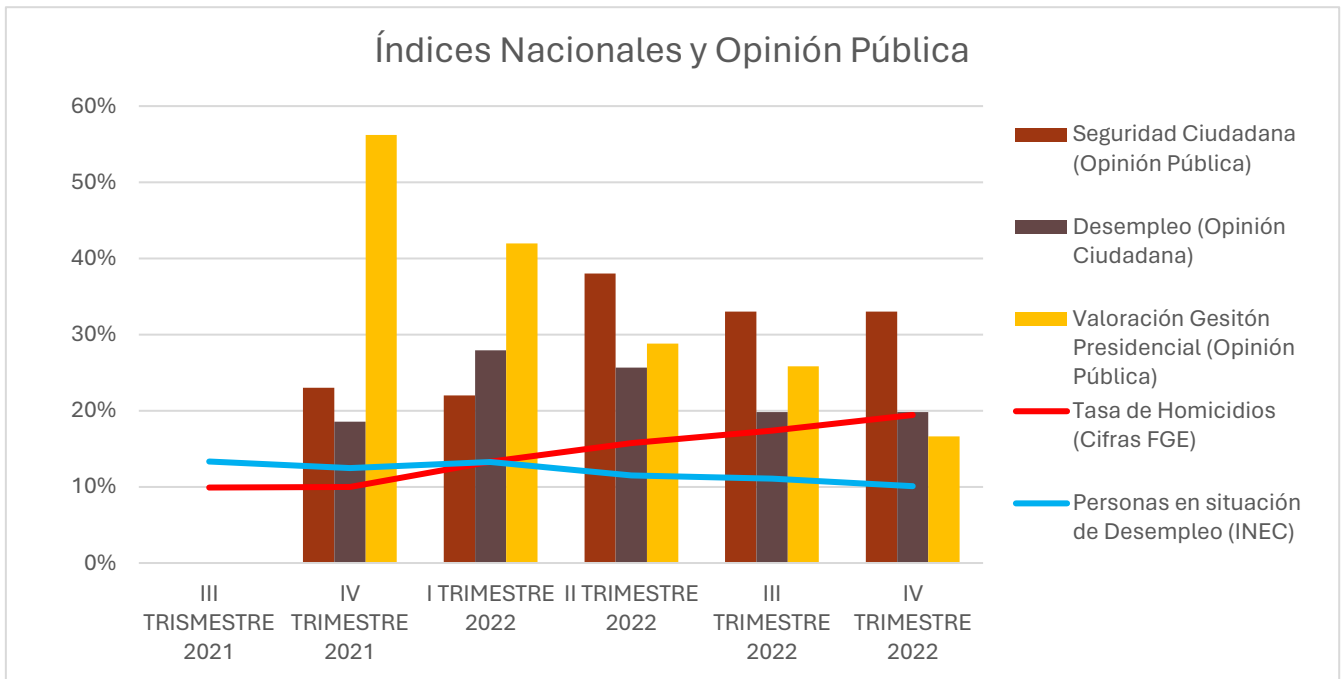
El primer año de gestión de Guillermo Lasso en la presidencia del Ecuador fue atravesada por la catarsis social que dinamitó la serie de crisis carcelarias. Esto provocó que las demandas de la agenda pública cambiaran en relación con los altos índices de criminalidad en el país. Para establecer esta relación es necesario contar con variables de control que permitan relacionar los resultados de los reportes de las entrevistas mediante el índice de desempleo y tasa de homicidios intencionados (ver Figura 10).

En este capítulo, los reportes emitidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, y las cifras facilitadas por la Fiscalía General del Estado de Ecuador, FGE, son publicadas de manera trimestral y, por ende, tanto la tasa de desempleo como la tasa de homicidios intencionados se registran similarmente.

En este sentido, cabe mencionar que la variable de control “situación de desempleo” es de carácter nominal y cuenta con una muestra trimestral de 27.048 viviendas a nivel nacional. Mientras que la siguiente variable de control “homicidios intencionales” es de carácter nominal y cuenta con una muestra entre el año 2021 hasta el año 2022 con un total de 7.319 personas fallecidas.

**Figura 10**

*Índices Nacionales y Opinión Pública*



*Nota:* Elaboración propia / INEC, FGE, INEDUM

Debido a los registros trimestrales de las cifras de las instituciones públicas, se han escogido 5 reportes de encuestas; 4 de ellos publicados por la agencia Click Research y 1 publicado por la agencia Perfiles de Opinión (ver Figura 10). Cada uno de estos reportes se ubica en un periodo trimestral diferente para contrastar si el clima de la opinión pública cambia acorde a las cifras oficiales del Estado.

La organización de reportes según el periodo trimestral está organizada de la siguiente manera:

- IV TRIMESTRE 2021: Reporte de encuesta del mes octubre del año 2021 publicado por la agencia Click Research.
- I TRIMESTRE 2022: Reporte de encuesta del mes de marzo del año 2022 publicado por la agencia Click Research.

- II TRIMESTRE 2022: Reporte de encuesta del mes de mayo del año 2022 publicado por la agencia Click Research.
- III TRIMESTRE 2022: Reporte de encuesta del mes de agosto del año 2022 publicado por la agencia Click Research.
- IV TRIMESTRE 2022: Reporte de encuesta del mes de octubre del año 2022 publicado por la agencia Perfiles de Opinión.

Como se evidencia en la Figura 10, el índice de las personas en situación de desempleo se mantiene estable entre los 2 primeros trimestres del año 2021 con un total de 14% del total de personas entrevistadas. Por otro lado, la cifra de homicidios intencionales se mantiene al margen del 7% del total. Cabe destacar que, en este periodo, el Gobierno de Lenin Moreno aún estaba en funciones y, por el otro lado, el Gobierno de Guillermo Lasso recién llega a tomar la posesión de mando a partir del día 24 de mayo del 2021.

A partir del tercer trimestre del año 2021, el índice de homicidios intencionados llega a subir 3 puntos con respecto a informes anteriores manteniéndose con un 10% del total del reporte bianual. Por otra parte, el índice de personas en situación de desempleo baja 1 punto con un total del 13,3%.

En el cuarto trimestre del año 2021, según el reporte de encuesta del mes de octubre del año 2021 publicado por la agencia Click Research, el índice de valoración de la gestión presidencial de Guillermo Lasso cuenta con un total de 56% a favor posicionándose como uno de los más altos de la región.

En este estudio también se obtiene que, para el total de personas entrevistadas, el 19% considera que el desempleo es uno de los principales problemas del país mientras que, según las cifras

oficiales del Estado, existe un margen de 12,4% de personas en situación de desempleo. En relación con las cifras de los anteriores reportes del INEC, se evidencia que el índice de desempleo está mostrando una tendencia decreciente a diferencia del primer trimestre del año 2021 lo que indica que existe un crecimiento de la población activa.

A relación con el índice de seguridad ciudadana, el reporte de la agencia Click Research, indica que, del total de personas entrevistadas, el 23% considera que la seguridad ciudadana es el principal problema del país Mientras que, según las cifras del FGE, la tasa de homicidios intencionados se mantiene igual que el trimestre anterior con un total del 10%. Esto quiere decir que, a pesar del aumento de las cifras del anterior trimestre, la tendencia se mantiene en márgenes estables.

En el primer trimestre del año 2022, el informe de encuestas de la agencia Click Research del mes de marzo del mismo año indica que la aprobación a favor de la gestión presidencial cuenta con un margen de 42%, marcando así 14 puntos de diferencia menos al anterior trimestre.

El estudio también sugiere que el 28%, del total de personas entrevistadas asumen que el desempleo es el principal problema del país mientras que, según las cifras del INEC, las personas en situación de desempleo llegan a aumentar 1 punto con respecto al trimestre anterior obteniendo así un margen del 13%. Esto quiere decir que, a pesar de la tendencia decreciente que indicaba reportes anteriores, sigue existiendo una inestabilidad mínima en el campo laboral.

Por otra parte, el estudio también indicó que hay un total del 22% que consideran a la seguridad pública como el principal problema del país mientras que, según cifras de la FGE, la tasa de homicidios intencionados subió 3 puntos con respecto al trimestre anterior obteniendo un total del 13,3%. Esto advierte que, a pesar del aumento en la tasa de homicidios, el índice de la

opinión pública tuvo un cambio menor a 1 punto con respecto al reporte anterior y, hasta el momento, no presenta ninguna alteración drástica en el clima de la opinión pública,

En el segundo trimestre del año 2022, el estudio de la agencia Click Research revela que el índice de aprobación a la gestión presidencial baja 12 puntos menos al anterior trimestre obteniendo una cifra total de 28,8%. Esto sugiere que el impacto de las primeras crisis carcelarias provocó un cambio significativo en la confianza de la ciudadanía y el Gobierno.

En lo que respecta al índice de desempleo, el estudio muestra que existe un total de 25,6% que lo consideran el principal problema del país. Sin embargo, según el informe del INEC, la tasa de personas en situación de desempleo baja 2 puntos con respecto al anterior trimestre ubicándose con una cifra del 11,4% del total de personas entrevistadas. Cabe destacar que esta cifra es la menor en lo que respecta a los índices de desempleo del año 2021, lo cual indica que la agenda institucional está influyendo en el área de la población activa del país.

En lo referente a seguridad ciudadana, el estudio indica que hay un aumento considerable de 16 puntos con respecto al anterior trimestre dando el resultado de 38% de personas que consideran a la seguridad ciudadana como el principal problema del país. Mientras que, según las cifras de la FGE, existe un aumento de 2 puntos en relación con la tasa de homicidios intencionados llegando a un total de 15,7%. Si bien el aumento no es tan abundante como el índice de la opinión pública, las cifras de la FGE muestran que existe una tendencia creciente simultánea al clima de la opinión pública.

En lo que respecta al tercer trimestre del año 2022, el estudio del mes de agosto la agencia Click Research advierte que, del total de personas entrevistadas, un 25,8% están a favor de la gestión de Guillermo Lasso. Esta cifra es inferior con 3 puntos al trimestre anterior y, por ende, esto

reafirma el decrecimiento de la fiabilidad de la agenda institucional con respecto a las demandas de la agenda pública.

Este estudio también muestra que existe un total de 19,8% personas que consideran al desempleo como el principal problema del país. Esta cifra es menor con 6 puntos en lo que respecta al trimestre anterior. Esto sugiere que, para la opinión pública, el desempleo ha dejado de tener cierto grado de relevancia entre los principales problemas del país. Mientras que, según cifras del INEC, las personas en situación de desempleo se mantienen en un margen del 11%, similar al anterior trimestre.

En lo concerniente a la seguridad pública, el estudio de la agencia Click Research indica que existe un total de 33% de personas que consideran a la seguridad ciudadana como el principal problema a atender en el país. Esta cifra es menor a 5 puntos en referencia al anterior trimestre, no obstante, se mantiene en un margen alto en lo que respecta a informes anteriores. En consonancia, las cifras del FGE del mismo periodo, muestran que existe un aumento de 2 puntos dando el total 17% de homicidios intencionados a nivel nacional.

En el cuarto trimestre del año 2022, según el reporte de encuestas de la agencia Perfiles de Opinión del mes de octubre, el índice de aprobación de la gestión presidencial se reduce hasta un margen del 17%. Es decir, 9 puntos de diferencia con el anterior trimestre y, en contraste, 39 puntos de diferencia con el primer trimestre del año 2022. Eso indica que, en el año 2022, la gestión del Gobierno de Guillermo Lasso ha sufrido un declive importante en términos de confianza y aprobación de la ciudadanía debido a que las demandas públicas no han sido atendidas, o gestionadas, conforme al proyecto político del Gobierno.

En lo que respecta al desempleo, un total de 20% de las personas entrevistadas consideran al desempleo como el principal problema del país. Una cifra que es similar al anterior trimestre y, también, se mantiene similar a las cifras arrojadas al primer trimestre del año 2022. No obstante, según el INEC, el índice de personas en situación de desempleo en el cuarto trimestre del año es del 10%, lo cual es menor a 1 punto en lo que respecta al trimestre anterior y, en comparación al inicio del año 2022, existe una diferencia de 2 puntos. Esto quiere decir que, si bien no existe una diferencia amplia en el transcurso de año, se demuestra que la tendencia del nivel de personas en situación de desempleo va acorde a la disminución de importancia que sugiere los índices de la opinión pública. No obstante, el desempleo se mantiene como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.

En lo que respecta a seguridad ciudadana, el estudio manifiesta que existe un margen del 33% del total de personas entrevistadas que lo consideran el principal problema del país, una cifra similar al anterior trimestre. No obstante, en lo relación al primer trimestre del año 2022, existe una diferencia superior de 10 puntos lo que, gradualmente, lo ha posicionado como el primer problema a atender según la opinión pública. Cabe destacar que, según las cifras del FGE, el cuarto trimestre consta de un margen de 19% de homicidios intencionados a nivel nacional, esta cifra se mantiene con una diferencia superior de 2 puntos con el anterior trimestre y, con referencia al primer trimestre del año 2022, lleva una diferencia superior de 9 puntos. En este sentido, cabe destacar que la tasa de homicidios intencionados tuvo un crecimiento constante acorde al índice del primer problema del país con relación a la opinión pública.

Tomando en cuenta el análisis hecho se puede considerar que la seguridad ciudadana, como principal problema según la opinión ciudadana, aumenta simultáneamente en relación con el incremento de la tasa de homicidios intencionados del país. Esto quiere decir que, según en

términos sociológicos, el incremento de la violencia civil también influye en el clima de la opinión política. Y esto, en relación con la valoración de la gestión del Gobierno de Guillermo Lasso, también se palpa en la confianza que tiene la ciudadanía en el proyecto gubernamental de turno.

#### 6.4 El resultado del primer año de gestión del Gobierno de Guillermo Lasso

Según el informe de encuestas de la corporación Latinobarómetro, el índice de aprobación de la gestión presidencial acoge alrededor del 6% de un total de 1200 personas entrevistadas. Una cifra aún más baja que el 10% referido al año 2020 en la gestión presidencial del Gobierno de Lenin Moreno. Esto quiere decir que, en tan solo un año de gestión, el Gobierno de Guillermo Lasso se ubica entre los que abarcan peores índices de aprobación ciudadana en la región (Sánchez & Granados, 2023).

Este estudio también demuestra que, en el campo de la seguridad ciudadana, alrededor del 47,8% de personas entrevistadas consideran que es el principal problema del país. Mientras que, el estudio del año 2020, el 1,5% lo consideraba como un problema nacional. Es decir, entre el Gobierno de Lenin Moreno y Guillermo Lasso, la preocupación de la ciudadanía subió un total de 46,3 puntos. Esto sugiere que el campo de la seguridad ciudadana ha sufrido un impacto exponencial que se ha acrecentado con el tiempo y, simultáneamente, la agenda institucional no ha logrado aplacar o solucionar desde la gestión del proyecto político.

En lo que respecta al desempleo, el estudio sostiene que existe una cifra del 15,6% del total de personas entrevistadas que consideran al desempleo como el principal problema del país. Esta cifra mantiene 5,3 puntos de diferencia con el estudio del año 2020 lo que demuestra que, si bien

existe una diferencia a considerar, el margen de cambio se mantiene en el rango habitual entre el año 2020 al 2023 a pesar de la influencia del COVID-19.

Por otra parte el estudio también indica que, en lo que se refiere a la situación económica del país, un total de 6% del total de personas entrevistadas lo consideran como el principal problema del país. Mientras que, en el año 2020, se mantenía con una cifra del 18,3%. Es decir, la preocupación ciudadana se redujo 12,3 puntos en consecuencia a la gestión del Gobierno de Guillermo Lasso.

Caso similar ocurre con el ámbito de la corrupción, según el estudio, un total de 9% de personas entrevistadas lo consideran como el principal problema del país. Mientras que, en el año 2020, un total de 17,8% lo consideraban de la misma forma. Es decir, la preocupación ciudadana se redujo 6,7 puntos en lo que refiere a la intervención del Gobierno de Guillermo Lasso. No obstante, tanto los cambios de la variable de economía como la variable de corrupción no representan significativamente que se hayan atendido las demandas de la agenda pública, sino que han existido anomalías con mayor impacto social que han acaparado la atención pública, un claro ejemplo son las crisis carcelarias y su influencia en la seguridad ciudadana.

## **7. Conclusiones**

La comunicación política en América Latina se centra en la relación de la agenda institucional con la realidad social civil y su convivencia con el entorno. Es así como cada proceso histórico determina particularidades individuales en cada región y, por ende, la implementación de estrategias políticas debe ser distintas unas con otras (Rincón, 2004). Por ejemplo, en el campo de la seguridad ciudadana, las estrategias punitivas de Guillermo Lasso para frenar la escalada de violencia en el Ecuador no tuvieron el mismo efecto que lo implementado por Nayib Bukele en

El Salvador, al contrario, han agudizado el fenómeno social hasta tal punto de recurrir a diversos estados de excepción que, tuvo como resultado, llegar el nivel más bajo de aprobación ciudadana en menos de un año de gestión de Gobierno evidenciando la ausencia de representatividad ciudadana.

Con respecto a la opinión pública, el miedo al crimen se ha consolidado como un factor recurrente para la movilización ciudadana en términos electorales. Sin embargo, también ha profundizado en el imaginario colectivo de que la prevalencia de la seguridad ciudadana ya no sea un bien colectivo, sino que sea una propiedad personal y, como resultado, la seguridad pasa de ser un derecho civil demandado a una propiedad en un mercado de connotaciones económicas y políticas (Wacquant, 2010). A consecuencia, la inclusión de corporaciones privadas y el recorte del sistema público se vuelven opciones “viables” en los proyectos políticos conservadores con el fin de captar las demandas de la agenda pública. No obstante, la aplicación de estas agudiza las problemáticas de instituciones sistemáticamente olvidados como los centros penitenciarios y los sistemas de reinserción social.

El trabajo de investigación recoge, de forma exploratoria, la influencia que ha provocado la serie de crisis carcelarias, entre el año 2021 – 2022, en la agenda pública del campo de la seguridad ciudadana. En este periodo de tiempo, la investigación centra su análisis en el cambio de la valoración sobre la gestión presidencial bajo la administración de Guillermo Lasso a través de la mirada de la opinión pública.

A criterios metodológicos, este estudio cuenta con una muestra de datos similar en lo que respecta a los diferentes informes de encuesta lo que permite evaluar de manera cronológica los cambios en los índices de las variables seleccionadas en el apartado analítico. Por esta razón se

selecciona los informes de encuesta de las agencias Click Research y Perfiles de Opinión ya que parten de un proceso científico con similares criterios de segmentación y selección de datos.

Como punto de partida, para esta investigación fue necesario conocer el antecedente al clima de la opinión pública previo al ascenso al Gobierno de Guillermo Lasso en el año 2021. En este sentido, según el análisis descriptivo realizado al informe del año 2020 publicado por la corporación Latinobarómetro, se puede determinar que el Ecuador se orientaba a un proceso de ilegitimidad institucional ya que contaba con los índices más bajos de la región con respecto a la valoración de la anterior gestión presidencial. A consecuencia, la desafección entre ciudadanía y Gobierno se ve reflejada en los datos del informe que, a criterios de la muestra de personas entrevistadas, se exponen los tres principales problemas del país; economía, corrupción y desempleo.

No obstante, como interés central a lo que respecta a esta investigación, en el año 2020 el estudio publicado por la corporación Latinobarómetro sostiene que cerca de 1,50%, de un total de muestra de 1200 personas entrevistadas consideran a la inseguridad como principal problema del país. Esto quiere decir que previo a la administración del Gobierno de Guillermo Lasso, el tema de seguridad ciudadana no representaba un principal interés en la agenda pública. No obstante, debido a la ausencia de un análisis con mayor extensión focalizado al seguimiento de medios que tenga como fin identificar si el encuadre de estos, tanto públicos como privados, tuvieron un papel protagónico en los temas de interés de la opinión pública. En consecuencia, no es posible afirmar que los temas de interés de la agenda pública sean acordes a la realidad social que esté viviendo el país.

En el contexto latinoamericano, el desapego entre la agenda pública y la agenda institucional denota la perpetuidad de prácticas de exclusión y violencia los cuales se determinan en pugnas

de poder entre ciudadanía y Gobierno (Rincón, 2004). Esto se evidencia en que, según la opinión pública con relación al contexto ecuatoriano; el desempleo, la economía y corrupción son los principales problemas del país que afectan al desarrollo de la ciudadanía y, por ende, la no disuasión de estas podría abrir brechas sociales que lleguen a influir en fenómenos catárticos para la democracia social.

En términos de seguridad ciudadana, el miedo al crimen y a la inseguridad se ha consolidado en el imaginario de la población ecuatoriana a través del contexto de las crisis carcelarias ya que, en el primero año de gestión presidencial de Guillermo Lasso, la inseguridad pasa a tener un margen del 120% de crecimiento en considerarse el primer problema del país según las cifras obtenidas en los informes de encuestas. A consecuencia, se puede considerar que agenda pública estaba centrada en el desempeño institucional sobre la solvencia a los índices de violencias ciudadana mientras que el Gobierno no encontraba la forma de apaciguar el desarrollo de las crisis carcelarias como tampoco afianzar su representatividad y confianza con la ciudadanía.

Cabe resaltar que la estrategia punitiva de militarización de los centros penitenciarios como la de zonas de mayor conflicto que presentan altos índices de violencia, no han dado el mismo resultado en el Ecuador a oposición del caso de El Salvador. Esta diferencia se orienta a que el territorio ecuatoriano ha sufrido un desplome presupuestario público que pasó de tener, en el año 2017, alrededor de 153 millones de dólares a reducir a 53 millones de dólares, en el año 2021, mientras que el hacinamiento en las cárceles sigue manteniendo un crecimiento exponencial. Por otra parte, el Gobierno de El Salvador centraba su estrategia en seguridad ciudadana a la reclusión masiva de las zonas de mayor conflicto abriendo nuevos centros penitenciarios lo que le permitía albergar más plazas para personas privadas de la libertad evitando, a corto plazo, un hacinamiento exponencial en los diversos centros de detención. Mientras que el Gobierno de

Guillermo Lasso, a raíz de no solucionar el problema presupuestario, la presencia militar y policial tanto en las zonas de conflicto, como en los centros penitenciarios, no dio resultado ya que el debilitamiento de la infraestructura, en general del sistema público, no proporcionaba garantías suficientes para un sostenimiento digno de las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad lo cuál fue uno de los motivos de la violencia al interior del sistema penitenciario.

Por otra parte, la pregunta de cómo las crisis carcelarias afectaron la valoración de la opinión pública sobre la gestión de del Gobierno de Guillermo Lasso a través del análisis descriptivo de los informes de encuestas emitidas por la agencia Click Research recogidas a criterios del desarrollo cronológico de las crisis carcelarias. De este análisis se puede concluir lo siguiente:

- El Gobierno de Guillermo Lasso logra iniciar su periodo de gestión con los índices más altos de la región con un porcentaje pese a la desafección política que estaba sumida el país bajo administraciones anteriores a su Gobierno.
- La progresión de las dos primeras crisis carcelarias, en el año 2021, muestran una cierta tendencia de descenso en el nivel de aprobación de la opinión pública a la gestión de Guillermo Lasso pasando de un porcentaje de 56% a 42 % en menos de 6 meses. En este mismo periodo, se destaca un aumento importante en el porcentaje del tema de seguridad ciudadana como principal problema del país que pasa de un 23% a un 37% del total de personas entrevistadas.
- En el mes de octubre del año 2022, luego de un total de cinco crisis carcelarias ocurridas entre el primer año de gestión del Gobierno de Guillermo Lasso, el nivel de aprobación se reduce a un total de 17% mientras que el tema de seguridad ciudadana,

como principal problema del país, logra mantenerse en un rango del 32% de total de personas entrevistadas.

La disminución del nivel de aprobación de Guillermo Lasso y el aumento de la seguridad ciudadana, como principal problema del país, denotan que el factor de influencia de las crisis carcelarias ha fomentado un síntoma de miedo social en el que la ciudadanía ya no mira al Gobierno como un refugio de seguridad y justicia sino, por el contrario, este se mira sobrepasado por el nivel de violencia y criminalidad en que el sistema público ya no posee medios para solventarlo (Niño, 2020). Por ende, en el campo de la comunicación política, la inseguridad se torna en un punto de quiebre entre la relación de ciudadanía y Gobierno lo cual denota que el proyecto político de Guillermo Lasso, en el transcurso de las crisis carcelarias, no puso especial atención en las demandas sociales lo que provocó que su agenda institucional no esté vinculada al territorio.

Por otra parte, con el fin de contar con un segundo proceso de verificación, esta investigación también añade un análisis descriptivo sumando variables de control que permiten identificar una relación más precisa sobre los temas de interés de la agenda pública con respecto a la situación del país. Las variables de control son dos; el índice de desempleo y la tasa de homicidios intencionales en Ecuador. De este estudio se toman las siguientes consideraciones:

- En el cuarto trimestre del año 2021, el índice de homicidios intencionados contaba con alrededor de un 13%, mientras que el nivel de aprobación a la gestión del Gobierno de Guillermo Lasso contaba con el 56% del total de personas entrevistadas. Cabe destacar que, en el año 2021, el índice de homicidios estaba por debajo del índice de desempleo con una diferencia de 4 a 6 puntos sin mayor variación. Esto demuestra que, antes de la llegada de Guillermo Lasso al poder, no se denotaba un

registro relevante sobre una alteración ya sea en índice de desempleo como el índice de homicidios intencionados.

- En el segundo trimestre del año 2022, se registra un cambio importante en el índice de homicidios que se coloca por encima con 17% mientras que el índice de desempleo baja a un 11% rompiendo así la homogeneidad de anteriores años. Simultáneamente, el nivel de aprobación de la gestión del Gobierno de Guillermo Lasso baja a un 29% del total de personas entrevistadas mientras que la seguridad ciudadana se coloca como principal problema del país con un 38%. Esto quiere decir que el aumento del índice de homicidios sube a la par que la preocupación de la opinión pública con respecto a la seguridad ciudadana y, por ende, esto llega a tener incidencia en la percepción del proyecto político que representa Guillermo Lasso en el poder.
- En el cuarto trimestre del año 2022, el índice de homicidios intencionales marca una proyección ascendente en la que mantiene un margen de 19% mientras que el índice de desempleo continua a la baja a un 10%. En lo que respecta a la opinión pública, la valoración de la gestión presidencial baja a una cifra del 17% mientras que el principal problema del país sigue ocupando la seguridad ciudadana con un margen del 33%. Debido al contraste del análisis obtenido, se puede considerar que la proyección ascendente de la tasa de homicidios intencionales refleja la preocupación de la opinión pública sobre la situación del país lo que le permite establecer una respuesta crítica desde la opinión pública hacia la gestión social del Gobierno de Guillermo Lasso con respecto a la seguridad ciudadana

Para entender las cifras antes mencionadas es necesario también recalcar la influencia que tuvo la progresión de recortes presupuestarios al sistema penitenciario nacional ya que supuso un

detonante para el fenómeno de las crisis carcelarias. Esto es evidente cuando en el año 2016 se contaba con un presupuesto de 153 millones de dólares con una tasa de homicidios intencionales de 5,8 por cada 100.000 habitantes mientras que, en el año 2021, se redujo a un monto de 54 millones de dólares con una tasa de homicidios de 14 por cada 100.000 habitantes (SNAI, 2023) Si bien el Gobierno de Guillermo Lasso no fue el promotor del recorte presupuestario progresivo, en la agenda institucional de su proyecto político no estaba el interés por solventarlo lo cual dinamitó su nivel de aprobación ciudadana pasando a ser uno de los más altos de la región a ser uno de los peores en menos de un año de gestión.

Con respecto a la hipótesis planteada al avance de esta investigación, no se puede afirmar de manera precisa que los sucesos de las crisis carcelarias fueran determinantes en el clima de la opinión pública sobre la gestión del Gobierno de Guillermo Lasso ya que, debido a las limitaciones metodológicas derivadas del marco espacio temporal en el que se desarrolla esta investigación, no se pueden abarcar campos de análisis con mayor complejidad en el que se permita identificar la implicación de la agenda mediática en la coyuntura nacional e internacional o, por otra parte, la añadidura de una base de datos con mayor muestra que permita una ponderación más significativa de las distintas regiones del país con el fin segmentar y particularizar la muestra desde diversas variables de control. No obstante, el resultado de este proyecto de investigación permite establecer un primer paso para elaborar una hoja de ruta en el que el análisis de la comunicación política pueda afrontar, desde una perspectiva interdisciplinaria, nuevos retos en el que se focalice la visibilidad a sectores sociales marginados que demandan nuevas narrativas científicas que incluya, tanto el entendimiento del papel del crimen organizado y el rol en las políticas jurídicas de control social del país.

Finalmente, a pesar de contar con una muestra de datos similares en los informes, no ha sido posible conocer cuál es el papel que cumple la agenda de medios en el clima de la opinión pública. Esto debido a las limitaciones para la elaboración de este proyecto de investigación el cual no se ha elaborado un plan seguimiento de los distintos medios de comunicación ya que este método demanda el uso de recursos técnicos, tanto humanos como materiales. A su vez, tampoco se ha planteado conocer la conformación de actores públicos y políticos que han trascendido mediante el transcurso de las crisis carcelarias a razón de que el acceso a entrevistas de personas especializadas en el contexto nacional del Ecuador, así como entrevistas a voceros políticos y sociales, ha sido obstruido por la situación nacional.

## Referencias.

- Álvarez, C. (2022) Las cárceles de la muerte en Ecuador. Disponible en: <https://nuso.org/articulo/las-carceles-de-la-muerte-en-ecuado/>
- Arkonada, K. (2020). Lenin y la dictadura del capital en Ecuador. Ecuador la insurrección de octubre. 1ra edición, 42 – 45. Url: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsd/collect/clacso/index/assoc/D15178.dir/Ecuador2.pdf>
- Arraigada, I. & Godoy, L. (1999) Seguridad ciudadana y violencia en América Latina. División de Desarrollo Social. CEPAL. Santiago de Chile – Chile.
- Arriagada, I., & Godoy, L. (2000). *Prevenir o reprimir: Falso dilema de la seguridad ciudadana. Revista de la CEPAL*, 70, pp 107-131.
- Banco Mundial (2011) *Informe sobre el conflicto mundial. Conflicto, seguridad y desarrollo*. Washington DC.
- Barrera, A. (2021). Ecuador: los laberintos de Guillermo Lasso. Nueva Sociedad. 296. 4-14.
- Becerra, M. (2014) Medios de comunicación: América Latina a contramano. Revista Nueva Sociedad. 249. pp 61 – 74.
- Bonasso, M. (2002) *El palacio y la calle. Revista Planeta*. Buenos Aires – Argentina
- CEPAL ((2022): Panorama Social de América Latina y el Caribe 2022: la transformación de la educación como base para el desarrollo sostenible, Santiago. Disponible en: <https://www.cepal.org/es/publicaciones/48518-panorama-socialamericalatina-caribe-2022-latransformacion-la-educacioncomo>
- Chinchilla, L., & Vorndran, D. (2018). *Citizen Security in Latin America and the Caribbean* (No. IDB-DP-640). Washington D.C.

- Correa, R. (2011) *Agenda Nacional de Seguridad Ciudadana y Gobernabilidad*. Manthra Editores. Quito.
- Costa, G. (2012) La situación de la seguridad ciudadana en América Latina. *Revista electrónica de derechos humanos*. N .31.
- Crespo, I. (2015). *¿Cómo cambia la comunicación política? Reflexiones y tendencias a partir de las experiencias de América Latina*. *Democracias*, 3, pp. 155-184.
- Crisis Group. (2020) *¿Milagro o espejismo? Pandillas y el desplome de la violencia en El Salvador* Informe de Crisis Group sobre América Latina N°81.
- Dammert, L. (2007) *Perspectivas y dilemas de la seguridad ciudadana en América Latina*. FLACSO. Ecuador
- Dammert, L. (2023). *El “modelo Bukele” y los desafíos latinoamericanos*. *Revista Nueva Sociedad*. 308, pp. 4-15
- Esteves, A. (2020) El impacto del COVID – 19 en el mercado de trabajo de Ecuador. *Revista Latinoamericana de Políticas y Acción Pública* .7(2). pp 35 – 41.
- García, A. (2023) *Agotamiento del modelo neoliberal en Ecuador: La caída de Guillermo Lasso*. Análisis Carolina.
- González, A. & Armijos, H. (2021) La crisis penitenciaria en Ecuador: un mal sin remedio. *Axioma*. 25. 66-72.
- Inter-American Development Bank. (2012). *Citizen Security: Conceptual Framework and Empirical Evidence* (232 No. IDB-DP-232). Discussion Paper. Washington D.C.
- Ipsos. (2018). *Principales problemas de América Latina*. Ipsos.  
[https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/201910/6300119inf\\_v6\\_28oct19.pdf](https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/201910/6300119inf_v6_28oct19.pdf)

- Jácome, D. y G, Jordán. (2022): “Crisis carcelaria en Ecuador”, *Iustitia Socialis*, 7 (2), pp. 846 – 856
- Le Quang, M. (2021). *No es tanto que Lasso y su programa ganaron las elecciones, sino que la revolución ciudadana las perdió*. Editorial FES.
- Macassi, S. (2002). *Conflictos sociales y espacio público. Responsabilidad de los medios en la conformación y escalada de los conflictos*. Re-vista Contribuciones, núm. 2. pp 19 - 28
- Malešević, S. (2010). *The Sociology of War and Violence*. Cambridge-New York: Cambridge University Press.
- Niño, C. (2020) Seguridad ciudadana en América Latina: Gobernanzas criminales y dimensiones de la violencia. Manual de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Universidad Sergio Arboleda. Bogotá – Colombia. pp 207 – 230
- Ortiz, S. (2020). COVID 19 Ecuador: Shock neoliberal y cuarentena perpetua. Cuadernos del pensamiento crítico latinoamericano. 76.
- Pontón, D. (2022): “Las nuevas cárceles en Ecuador: un ecosistema para la reproducción del crimen complejo”, *Universitas*, XXI (37), pp. 179-199.
- Réserve, R. (2016). *El Salvador: Un año político y social convulso*. *Revista de Ciencia Política*, 36(1), pp. 177-194.
- Rico, J. & Chinchilla, L. (2002) *Seguridad ciudadana en América Latina: hacia una política integral*. Siglo XXI. México
- Rincón, O. (2004). *Comunicación política en América Latina*. Centro de Competencia en Comunicación para América Latina. pp. 1 - 2
- Roque, R. (2021) *Nayib Bukele: populismo e implosión democrática*. *Revista Andamios*. Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

- Sánchez, F. & Granados, C. (2023) *Institucionalización de la política contenciosa: Ecuador bajo Guillermo Lasso*. *Revista de Ciencia Política*. Universidad de Salamanca. No. 2. pp 279 - 300
- Sutherland, E. (1999). *El delito del cuello blanco*. Ediciones Endymion. Madrid
- Viñas, R., Belinche, M., Secul, C. & López, Y. (2023) *Comunicación política en la era digital y su vinculación con el territorio*. *Revista Más PoderLocal*, 51: 43-59. <https://doi.org/10.56151/maspoderlocal.118>
- Von Santos, H. (2014). *Las pandillas salvadoreñas y su comportamiento delictivo: prospectiva de sus formas organizativas y expansión territorial para el próximo decenio 2015-2025*. *Revista Policía y Seguridad Pública*,4(2), pp 183-225.
- Wacquant, L. (2010). *Castigar a los pobres: el gobierno neoliberal de la inseguridad social*. Ediciones Gedisa. Barcelona
- Zambrano, S. (2016). El acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva en relación con la seguridad ciudadana en Ecuador. TLA-MELAU. Universidad Autónoma de Puebla. México. No 39, pp. 58-78
- Agamben, G. (2005). *Estado de excepción*. Adriana Hidalgo editora, Buenos Aires.

## Anexos

### Ficha Técnica Click Research

- Tipo de investigación: Cuantitativa
- Tipo de muestreo: Aleatorio Simple
- Tipo de metodología: Entrevistas “cara a cara” en hogares
- Encuestas realizadas: 760 encuestas
- Zonas investigadas: Quito (380) y Guayaquil (380) / El resultado total se obtuvo de la ponderación del tamaño poblacional de cada zona investigada.
- Representatividad: 95%
- Margen de error: +/- 3%
- Población objetivo: Mayores de 18 años

### Preguntas seleccionadas Click Research

- Según usted ¿Cuál es la calificación de la gestión de Guillermo Lasso?
  - Buena
  - Mala
- Según usted ¿Cuál es el principal problema que tiene Ecuador en estos momentos?
  - Economía
  - Seguridad Ciudadana
  - Desempleo
  - Corrupción

### Ficha técnica Perfiles de Opinión

- Tipo de investigación: Cuantitativa
- Tipo de muestreo: Aleatorio Simple
- Tipo de metodología: Entrevistas “cara a cara” en hogares con cuestionario semiestructurado
- Encuestas realizadas: 622 encuestas
- Zonas investigadas: Quito y Guayaquil
- Representatividad: 95%
- Margen de error: +/- 4%
- Población objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años

### Preguntas seleccionadas Perfiles de Opinión

- Según usted ¿Cuál es la calificación a la gestión del presidente Guillermo Lasso?
  - Buena
  - Mala